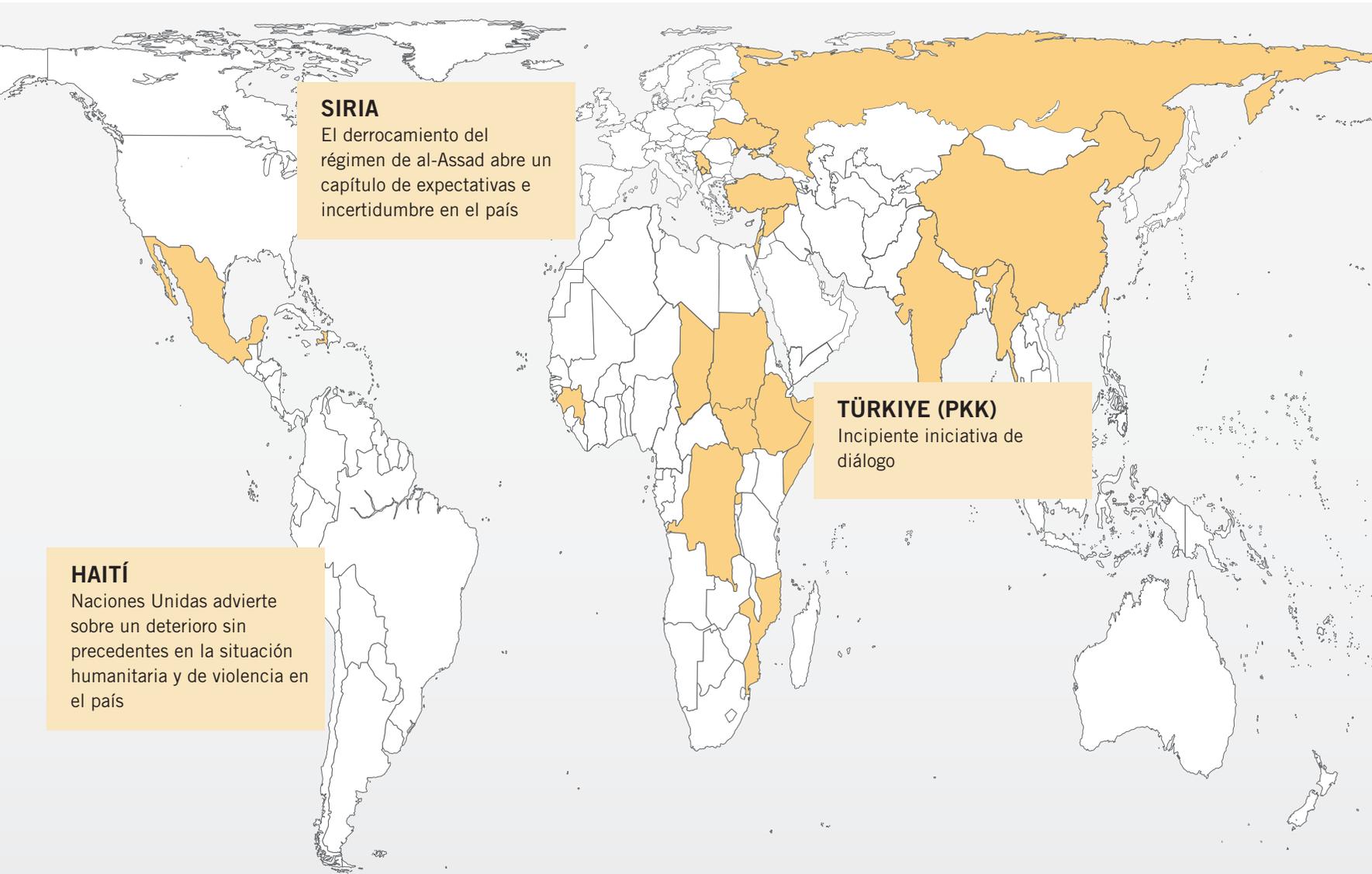


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Enero de 2025

ecp escola de cultura de pau

UAB Universitat Autònoma de Barcelona



SIRIA

El derrocamiento del régimen de al-Assad abre un capítulo de expectativas e incertidumbre en el país

HAITÍ

Naciones Unidas advierte sobre un deterioro sin precedentes en la situación humanitaria y de violencia en el país

TÜRKIYE (PKK)

Incipiente iniciativa de diálogo

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Chad
Etiopía – Somalia (Somalilandia)
Guinea
Mozambique
RDC – Rwanda
Sudán
Sudán del Sur

AMÉRICA

México

ASIA Y EL PACÍFICO

China – Taiwán
India (Manipur)
India – China
Myanmar

EUROPA

Rusia – Ucrania
Serbia – Kosovo

ORIENTE MEDIO

Israel – Hezballah
Israel – Palestina

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

- *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación
- trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o
- cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas
- de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número
- abarca el periodo entre octubre de 2024 y el 13 de enero de 2025.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre octubre de 2024 y el 13 de enero de 2025.

Casos destacados:

SIRIA: El derrocamiento del régimen de al-Assad abre un capítulo de expectativas e incertidumbre en el país

TÜRKIYE (PKK): Incipiente iniciativa de diálogo

HAITÍ: Naciones Unidas advierte sobre un deterioro sin precedentes en la situación humanitaria y de violencia en el país

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

CHAD: Se celebran las elecciones que ponen fin a la transición iniciada en 2021

ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA): Acuerdo entre los dos países tras meses de tensiones

GUINEA: La Junta Militar incumple el acuerdo transicional de celebración de elecciones presidenciales aumentando la tensión con la oposición

MOZAMBIQUE: El país enfrenta una grave crisis política y social debido a las disputas poselectorales y a la fuerte represión

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO – RWANDA: Fracasas las iniciativas diplomáticas regionales para alcanzar un acuerdo mientras persiste la ofensiva del M23

SUDÁN: Se agudiza la crisis humanitaria en el país por la intensificación de la guerra

SUDÁN DEL SUR: Se estancan las negociaciones de paz en medio de un nuevo incumplimiento de celebración de las elecciones presidenciales

AMÉRICA

MÉXICO: El número de asesinatos en 2024 supera los 30.000

ASIA Y EL PACÍFICO

CHINA – TAIWÁN: Taiwán declara que en 2024 el número de incursiones aéreas por parte de China se incrementó en un 80%

INDIA (MANIPUR): Se produce una nueva oleada de violencia en el estado

INDIA – CHINA: Nuevo acuerdo que permite disminuir la tensión en la disputa fronteriza que mantienen ambos países

MYANMAR: Las acciones de los grupos armados llevan al régimen militar a su momento de mayor debilidad desde el golpe de 2021

EUROPA

RUSIA – UCRANIA: Discusiones sobre posibles futuras negociaciones, pero incerteza ante la nueva Administración Trump

SERBIA – KOSOVO: Incremento de tensiones y obstáculos en las negociaciones

ORIENTE MEDIO

ISRAEL – HEZBOLLAH: Acuerdo de cese el fuego se mantiene en contexto de fragilidad

ISRAEL – PALESTINA: Investigaciones elevan la cifra de muertes en Gaza y refuerzan las acusaciones de genocidio contra Israel



Familias sirias y refugiadas, llegando a Siria. Fuente: UNICEF/Rami Nader

SIRIA

El derrocamiento del régimen de al-Assad abre un capítulo de expectativas e incertidumbre en el país

La caída del régimen de los al-Assad después de más de cinco décadas en el poder abre una nueva etapa en la historia de Siria caracterizada por las expectativas de cambio y la incertidumbre ante los ingentes retos que se vislumbran. El derrocamiento de Bashar al-Assad se produjo tras una acelerada sucesión de acontecimientos que cambió radicalmente el escenario en Siria en un período de tan solo diez días. El 27 de noviembre, desde el noroeste del país, fuerzas opositoras al régimen iniciaron una ofensiva liderada por la organización Hayat Tahrir al-Sham (HTS) con apoyo del Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés), conglomerado respaldado por Türkiye. Rápidamente estos grupos avanzaron en el control de territorios hacia el sur, capturando posiciones clave como las ciudades de Aleppo, Hama y Homs. En paralelo, otros grupos de oposición lanzaron ataques contra el régimen desde la zona meridional del país, en las provincias de Deraa y Suwayda. Las fuerzas rebeldes encontraron escasa resistencia de las Fuerzas Armadas sirias en su avance hacia la capital, Damasco, que pasó a estar bajo control de la oposición el 8 de diciembre. Ese mismo día se confirmaba que Bashar al-Assad había abandonado el país rumbo a Moscú y que

Rusia había decidido concederle asilo junto a su familia. Se ponía fin así al Gobierno de al-Assad 13 años después de la revuelta en su contra en el marco de las “primaveras árabes” y 54 años después de que su padre, Hafez al-Assad, iniciara la dictadura.

La histórica caída de Bashar al-Assad se produjo tras 13 años desde el inicio de la revuelta en Siria y medio siglo después del inicio de la dictadura de Hafez al-Assad

El cambio de régimen se produjo en un contexto de conflicto armado que se inició en 2011 y que ha tenido devastadoras consecuencias para el país: en torno a medio millón de víctimas mortales (según estimaciones), desplazamiento forzado de más de la mitad de la población, una grave crisis humanitaria y económica, innumerables vulneraciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de guerra por parte de los numerosos actores armados involucrados en la contienda, en la que se han proyectado múltiples intereses regionales e internacionales. Desde 2020 los frentes de batalla se mantenían relativamente estables, después de que un acuerdo de cese el fuego promovido por Rusia y Türkiye consolidara las áreas de control por parte de las principales fuerzas implicadas en la disputa. Pese a ello, los enfrentamientos persistían –el conflicto armado en Siria ha sido clasificado como de “alta intensidad”

ininterrumpidamente desde 2011 en los análisis de la Escola de Cultura de Pau– y en el último tiempo diversas voces alertaban sobre el incremento de la violencia y la frágil situación en el país, en un escenario caracterizado también por el **bloqueo de las iniciativas de mediación** y de búsqueda de salidas políticas a la contienda. Pese a la persistencia de las hostilidades, el Gobierno de al-Assad se había proyectado como el vencedor *de facto* –había recuperado el control de la mayor parte del territorio del país– y en el último tiempo se había visto beneficiado por la normalización de relaciones con múltiples actores internacionales, como escenificó su reincorporación a la Liga Árabe en 2023. Los hechos transcurridos entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024 –que provocaron más de 500 muertes y el desplazamiento de un millón de personas– cambiaron súbitamente este escenario.

Claves de una caída

¿Cómo se explica la precipitada caída del régimen? La respuesta a este interrogante requiere tener en cuenta factores externos e internos. Los acontecimientos en Siria están relacionados con el contexto regional, con la deriva de acontecimientos tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, el genocidio de Israel en Gaza y la intensificación de las tensiones regionales. Como han señalado diversos análisis, los hechos que desembocaron en la caída de al-Assad han evidenciado el **debilitamiento del llamado “eje de resistencia”** tras un año de hostilidades con Israel. Con el foco en su propia confrontación con las fuerzas israelíes, ni Teherán ni Hezbollah tenían los recursos, efectivos o disponibilidad para asistir a sus aliados en Damasco. Tampoco Rusia, el otro sostén del régimen de Bashar al-Assad, que concentrado en la invasión de Ucrania (desde 2022) había reducido significativamente sus fuerzas militares en Siria –en noviembre de 2024 mantenía en Siria solo dos batallones y un escuadrón aéreo, unos 7.500 efectivos según medios de prensa. Así, los aliados clave que habían influido de manera determinante en el curso del conflicto años atrás y que habían garantizado la permanencia del régimen de al-Assad lo dejaron caer sin apenas desplegar medidas para contrarrestar la ofensiva de los grupos opositores.

A nivel interno, la escasa resistencia ofrecida por las fuerzas de seguridad siria y las numerosas deserciones de soldados durante la ofensiva opositora también se explica por las políticas del régimen. El Gobierno de Bashar al-Assad había optado por confiar su supervivencia en los apoyos foráneos y no había reforzado a sus Fuerzas Armadas. Al contrario, se apoyaba en un contingente de reservistas y soldados reclutados forzosamente, mal pagados y con escasa motivación. Análisis destacan que en las fuerzas del régimen imperaba la precarización, la fragmentación y competencia entre brigadas y con milicias progubernamentales. Ante el debilitamiento y la distracción de los soportes foráneos del régimen, grupos armados opositores aprovecharon para lanzar su ofensiva. El protagonismo ha sido de HTS –organización sucesora del antiguo Frente al-Nusra, el ex brazo armado de al-Qaeda en Siria y clasificada como grupo terrorista por

la ONU y numerosos países–, que había consolidado su presencia en la provincia de Idlib. Aunque la trayectoria y experiencia de gobernanza de la organización suscita recelos entre múltiples actores sirios, el cambio de régimen fue celebrado dentro y fuera del país por sectores de variadas confesiones y posturas políticas. Uno de los hechos más significativos fue la liberación de prisioneros de las cárceles del régimen, algunos de los cuales llevaban décadas detenidos y sometidos a gravísimas torturas y vejaciones, como ha ilustrado dramáticamente la experiencia de la **cárcel de Sednaya**. Estos hechos permiten subrayar también la resiliencia de la población siria en su resistencia contra los al-Assad. En los últimos años, la acción de diversos colectivos sirios ha sido decisiva para mantener el cuestionamiento internacional del régimen por sus crímenes y vulneraciones a los derechos humanos.

En este contexto, Siria afronta un futuro incierto y frágil marcado por un sinnúmero de incógnitas fruto de los desafíos políticos y de seguridad a nivel local y a la persistencia de las injerencias de actores foráneos, regionales e internacionales, siguiendo la tónica de su historia reciente. Algunos de estos actores han continuado reafirmando en el uso de la fuerza para avanzar sus agendas e intereses en Siria. Prueba de ello es que, pocas horas después de la salida del poder de al-Assad, fuerzas israelíes avanzaron posiciones en torno a los Altos del Golán más allá de la zona desmilitarizada y ocuparon nuevos territorios en Siria, bajo el argumento de prevenir posibles ataques contra Israel. El Gobierno de Netanyahu intensificó sus acciones en el país y lanzó una amplia ofensiva contra los arsenales sirios (más de 500 ataques), destruyendo en torno al 70-80% de sus capacidades navales, aéreas, reservas de armas químicas y sitios de producción de armas. Paralelamente, Türkiye ha intensificado sus acciones contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, mientras que EEUU y otros países, como Francia, han lanzado una serie de ataques contra posiciones de ISIS con la intención declarada de evitar que la organización explote el contexto de inestabilidad para recuperar fuerzas en Siria.

Perspectivas de transición

Los interrogantes y los retos a nivel interno son innumerables. Uno de los más acuciantes tiene que ver con cómo se gestionará la transición post-Assad y el papel que asumirán los distintos actores políticos y armados. Un tema crucial es el del rol que desempeñará HTS. Desde 2017 el grupo ha intentado distanciarse de sus pasados vínculos con organizaciones extremistas y en su campaña de derrocamiento de al-Assad ha intentado proyectar un **perfil pragmático** y en declaraciones recientes ha apelado a la unidad y ha intentado conectar con las aspiraciones de la revolución siria. El líder de HTS, Ahmed al-Sharaa –que ha abandonado el uso de su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani– anunció el 10 de diciembre que Mohamed al-Bashir asumiría el gobierno en funciones hasta marzo de 2025. Al-Bashir se había desempeñado hasta entonces como responsable del Gobierno de Salvación

Sirio en Idlib, una estructura establecida por HTS para administrar el área bajo su control. Días más tarde, las autoridades de transición anunciaron la suspensión del Parlamento y la Constitución en esta fase y avanzaron la intención de conformar un mecanismo de diálogo nacional. No obstante, sectores sirios han expresado reservas por la falta de transparencia y limitada representatividad en la conformación de este espacio. Activistas feministas sirias han reiterado **la intención de las mujeres de formar parte activa en el proceso de transición** y –si bien mantienen la esperanza en las perspectivas que ofrece la nueva etapa– han expresado dudas sobre la forma en que gobernarán las nuevas autoridades, en especial en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

En este contexto, han proliferado también las iniciativas diplomáticas de diversos actores que intentan establecer relación con las nuevas autoridades e influir en la evolución del proceso político en el país. Entre ellos, gobiernos occidentales, países árabes que habían conformado un grupo de contacto sobre Siria y Naciones Unidas, que en los últimos años ha intentado sin éxito facilitar una salida política al conflicto sirio. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, visitó el país a mediados de diciembre y en sus declaraciones ha insistido en que **el nuevo escenario ofrece una oportunidad para una transición inclusiva** y que respete la pluralidad de voces en Siria. Hasta ahora, las iniciativas impulsadas por la ONU habían tenido como referencia la resolución 2254 que dibujaba una hoja de ruta para la transición. No obstante, el propio Pedersen ha reconocido que este marco no puede aplicarse de manera automática –estaba concebido para una negociación entre las fuerzas de oposición y el régimen de al-Assad–, pero ha insistido en que sus principios clave continúan siendo relevantes y vigentes. Entre ellos, la necesidad de una nueva Constitución y la celebración de elecciones libres. Al-Sharaa, que ha calificado la resolución 2254 como desfasada, ha sugerido una hoja de ruta que no prevé comicios hasta dentro de cuatro años, para dar tiempo a la recuperación de las infraestructuras, la comunicación con las comunidades sirias en el exterior y datos estadísticos actualizados de población. El cronograma establecido en la resolución 2254 preveía comicios en un plazo de año y medio. Colectivos la diáspora siria están compartiendo y defendiendo sus propias hojas de ruta ante las nuevas autoridades. Los plazos y términos del levantamiento de sanciones que estaban vigentes contra el gobierno sirio se perfilan como una de las herramientas de presión. La UE, por ejemplo, analizará el levantamiento de las restricciones a finales de enero, pero ha adelantado que **dependerá de que la transición garantice la protección de las minorías y los derechos de las mujeres**.

Otro de los temas clave será el abordaje de las exigencias de justicia y rendición de cuentas, que exige abordar los abusos de los múltiples actores implicados en la contienda y **requiere de la preservación de evidencias**. Cabe recordar que familiares todavía buscan a más de 100.000 personas

desaparecidas en Siria, en su mayoría tras ser detenidas y recluidas en los centros de tortura del régimen.

En el ámbito de la seguridad los retos también son ingentes y evidencian la necesidad de un alto el fuego de alcance nacional. Las nuevas autoridades han anunciado acuerdos con algunos grupos armados de oposición para su desmantelamiento e integración en una fuerza militar unificada. Pese a ello, diversos actores continúan operando por libre y se han denunciado acciones de venganza y ejecuciones extrajudiciales en localidades como Hama, Homs y Latakia que generan profunda inquietud en sectores sirios. También se han producido ofensivas de grupos leales a al-Assad contra fuerzas del gobierno de transición en zonas como Tartous. Por ello, uno de los grandes retos que se identifica es asegurar la estabilidad, prevenir los ataques contra minorías y evitar ciclos de represalia y violencia. Paralelamente, uno de los focos que genera mayor preocupación es la violencia en el noreste de Siria, donde el SNA –conglomerado que cuenta con el apoyo de Türkiye y reúne a facciones islamistas, nacionalistas y remanentes del Ejército Sirio Libre– ha lanzado una ofensiva contra las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), lideradas por el grupo kurdo YPG/YPJ. El SNA ha arrebatado a los kurdos el control de localidades estratégicas como Tal Rifaat o Manbij y pretende capturar otras como Kobane. EEUU, que ha apoyado a las SDF –aliado en la lucha contra ISIS en la región– ha intentado promover un cese el fuego entre las diferentes facciones, pero el contexto continúa siendo altamente volátil. Las perspectivas para abordar la cuestión kurda en Siria están también condicionadas por la evolución de los contactos entre Ankara y el PKK (**véase el análisis sobre Türkiye [PKK] en esta publicación**). En esta área noreste de Siria ISIS también estaría aprovechando el vacío de poder y existe el riesgo de que la fuga de miles de prisioneros del grupo –hasta ahora custodiados por las SDF– puedan reforzar las células durmientes de la organización.

A esto se suman los retos asociados a los ataques y a la presencia de Israel en Siria. Al-Sharaa ha condenado de manera contenida las acciones israelíes y ha declarado que las nuevas autoridades sirias no pretenden ser una amenaza para sus vecinos ni para Occidente. HTS ha explicitado que no busca una confrontación con Israel, pero subrayando que ahora que la influencia iraní en Siria ha cesado, el Gobierno de Netanyahu no tiene razones para continuar bombardeando el país. El posicionamiento ha sido interpretado como una señal de que la tensión podría escalar si Israel persiste en sus acciones. Análisis subrayan que la caída de al-Assad ha sido celebrada en Israel por debilitar a Irán, pero que el antiguo régimen sirio había sido en la práctica un “rival conveniente”. Aunque Israel ha declarado que las medidas recientes en Siria son “limitadas y temporales”, su política previa de hechos consumados y anuncios recientes respecto a que pretende doblar la población israelí en los Altos del Golán

permiten anticipar tensiones en caso de que las nuevas autoridades sirias pretendan desafiar su ocupación ilegal de este territorio.

Cálculos regionales e internacionales

Los hechos recientes en Siria no solo suponen un punto de inflexión para el país, sino que también implican **cambios en la correlación de fuerzas en Oriente Medio** y condicionan los cálculos y perspectivas de actores regionales e internacionales. Así, el cambio de régimen se lee como un duro golpe para Irán –y su “eje de resistencia”–, que pierde a un aliado en el que ha invertido un importante capital político y militar en los últimos años y pierde también la ruta directa de acceso a Hezbollah, otro actor regional que se verá directamente afectado por la caída de al-Assad y degradado en sus capacidades tras meses de enfrentamiento con Israel. El derrocamiento del régimen sirio también se interpreta como un golpe para Moscú, poniendo en duda sus posibilidades –o disposición– de ser una influencia determinante en Oriente Medio. Los hechos recientes ponen incluso en duda una presencia relevante de Rusia en la zona. Moscú ha establecido contacto con las nuevas autoridades sirias y **su prioridad sería mantener su base naval en Tartous** –la única que tiene en el Mediterráneo, desde 1971– y la base aérea de Hmeimim, que desde 2015 ha servido como base de operaciones de las fuerzas rusas en Siria y como punto clave para la asistencia rusa a sus fuerzas y grupos aliados en África.

Por el contrario, el nuevo escenario perfila a Türkiye como un actor con capacidad para sacar ventaja de los cambios e influir de manera relevante en el proceso de transición sirio. Aun así, está por verse la evolución de la relación de Ankara con HTS –grupo al que formalmente había declarado organización terrorista, pero con el que mantenía una relación pragmática– y si podrá incidir en su relación con otros grupos de la oposición siria respaldados por Türkiye. También será clave cómo continuará abordando la cuestión kurda en Siria y su relación con

las SDF, que dependen del apoyo de EEUU. El líder de las SDF y de las fuerzas kurdas de Siria ha insistido en su **llamamiento a Washington a que mantenga sus fuerzas en la zona** –unos 2.000 efectivos– y ha subrayado el riesgo de que el nuevo escenario derive en un resurgimiento de ISIS. No obstante, la próxima llegada de Trump a la presidencia abre un escenario incierto a la continuidad de las fuerzas de EEUU en Siria, teniendo en cuenta que el exmandatario ya optó por un importante repliegue de tropas del país durante su primer gobierno y que en declaraciones recientes ha subrayado que Türkiye es el actor clave en el actual contexto regional.

Las posiciones de los países árabes varían relativamente, en función del estado de su relación con el antiguo régimen y de los apoyos a distintos actores en el marco del conflicto sirio. A nivel general, su preocupación es la estabilidad del país y la resolución de cuestiones que ya habían estado en su agenda en sus últimos contactos con el gobierno de al-Assad: la repatriación de la población refugiada siria –un asunto que interesa especialmente a países como Jordania y Líbano, pero también a Türkiye, que han sido los principales receptores de sirios y sirias desde el inicio del conflicto armado– y el control de la producción y tráfico de droga desde Siria. Bajo el régimen de al-Assad el país se involucró activamente en la elaboración y distribución de Captagon, un tipo de anfetamina que ha tenido a Jordania como principal ruta y a los países del Golfo como destinatarios clave. Análisis han llegado a describir a **Siria como un “narco-Estado”**, en el que jugaba un papel determinante el hermano de al-Assad –Maher, también comandante de la Cuarta División Armada, unidad de élite del Ejército– y que puede seguir siendo explotado por traficantes. En el caso del vecino Iraq, los principales asuntos de preocupación de su Gobierno son el tipo de relación que establecerá con las nuevas autoridades y en particular con HTS –antes de distanciarse del grupo, al-Sharaa fue combatiente de al-Qaeda en Iraq– y también un eventual resurgimiento de ISIS ante un posible escenario de inestabilidad a largo plazo.



Fuente: Hürriyet

TÜRKIYE (PKK)

Incipiente iniciativa de diálogo

Se abre en Türkiye una nueva oportunidad de diálogo para la resolución del conflicto armado que enfrenta a Türkiye y al PKK, de la mano de diversas medidas y gestos en el último trimestre de 2024 y principios de 2025, aunque con incertidumbre y dificultades sobre las posibilidades de consolidarse y de éxito. Entre los pasos en positivo, AI-Monitor informó a inicios de octubre de la existencia de **conversaciones exploratorias** entre el gobierno turco y el líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, así como de contactos entre Öcalan y los líderes del PKK con base en el norte de Iraq. El diálogo exploratorio estaría encaminado a un posible reinicio de negociaciones. Según una de las fuentes en AI-Monitor, Öcalan habría transmitido al liderazgo del PKK que era tiempo de discutir el abandono de las armas.

Junto al mencionado diálogo exploratorio no público, en los últimos meses de 2024 e inicios de 2025 se produjeron gestos, medidas y discursos de acercamiento en la esfera pública. Por una parte, Devlet Bahçeli, el líder del partido ultranacionalista turco Partido de Acción Nacionalista (MHP) y aliado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lanzó el **22 de octubre la propuesta** de

Emerge en Türkiye una nueva iniciativa de paz, con conversaciones exploratorias entre el Gobierno y el PKK y diálogo entre partidos políticos de Türkiye

que, si se levantase la situación de aislamiento de Öcalan, este podría ser invitado al Parlamento turco a declarar “el fin del terrorismo” y la disolución de su organización. El llamamiento de Bahçeli estuvo precedido del gesto de un **apretón de manos de Bahçeli** a parlamentarios del partido pro-kurdo DEM al inicio del curso parlamentario, el 1 de octubre, y de comentarios ante la prensa sobre el inicio de un nuevo periodo y el deber de establecer la paz en Türkiye. Sus gestos y declaraciones generaron gran impacto político, mediático y social en Türkiye. Bahçeli es un líder histórico del MHP, conocido por su posición históricamente contraria a negociaciones con el PKK y que había reclamado la ilegalización del partido pro-kurdo DEM, aunque **algunos análisis han matizado** que durante los anteriores procesos de paz entre 2009 y 2015, si bien Bahçeli realizó críticas, en general no los obstaculizó.

Tras esos gestos, el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló también el inicio de un nuevo **periodo de distensión**, respaldando las declaraciones y gestos que se estaban dando. Con un enfoque que combina el lenguaje antiterrorista y el apoyo a un nuevo escenario político, Erdogan ha señalado la existencia de una

“oportunidad histórica”. El DEM –que tradicionalmente ha defendido una solución dialogada al conflicto– respondió positivamente al acercamiento, afirmando su voluntad de iniciar una iniciativa de paz, y remarcando que el fin del aislamiento es un requisito para el inicio de un proceso de paz en cualquiera de sus formas. El principal partido opositor, el CHP, expresó apoyo con cautela y señaló la importancia de abordar y resolver el conflicto a través del Parlamento y no reducir el diálogo a la figura de Öcalan.

Visitas al líder del PKK y rondas de reuniones políticas

Otras medidas de acercamiento incluyeron pasos concretos como la autorización por las autoridades turcas de una visita a Öcalan por parte de su sobrino y diputado del DEM, Omer Öcalan, el 23 de octubre. Fue la primera autorización de visita en 43 meses y tuvo formato de visita de familiares. Según Omer Öcalan, Abdullah Öcalan trasladó el mensaje de que si las condiciones eran las adecuadas, él tenía “el poder teórico y práctico” para mover el proceso desde el conflicto y la violencia a un escenario legal y político. Otro elemento significativo fue la autorización del Gobierno de otra visita a Abdullah Öcalan por parte de una delegación del DEM el 28 de diciembre y los consiguientes pasos. La delegación estuvo compuesta por dos figuras de relevancia en el partido, Pervin Buldan y Sirri Sureyya Onder –partícipes en el anterior proceso de paz fallido. Tras la visita trasladaron **siete puntos del enfoque de Öcalan**, incluyendo la importancia de que todos los actores políticos en Türkiye contribuyan al proceso y que una de las principales plataformas para esas contribuciones sea el Parlamento. Öcalan hizo referencias al contexto regional, puso en valor las contribuciones de la oposición en Türkiye y afirmó tener la “necesaria competencia” y determinación para contribuir al “nuevo paradigma” promovido por Bahçeli y Erdogan. Señaló que la delegación trasladaría su aproximación a los actores estatales y políticos. Y, significativamente, afirmó estar preparado para dar los pasos positivos necesarios y realizar “el necesario llamamiento”, en referencia a un potencial llamado al fin de la lucha armada.

A la reunión de la delegación con Öcalan siguieron reuniones entre el 2 y 7 de enero de la delegación del DEM con el presidente del Parlamento y con líderes y altos dirigentes de los principales partidos parlamentarios (MHP, GP, AKP, Saadet, CHP, DEVA, YRP, en el orden en el que tuvieron lugar). El partido nacionalista IYI declinó reunirse con la delegación. Las reuniones entre la delegación del DEM y los partidos políticos fueron calificadas por las partes como constructivas y positivas. Otro paso incluyó la visita de la delegación del DEM con el co-líder del HDP (partido predecesor del DEM) Selattin Demirtas y con el ex alcalde de Diyarbakir Selçuk Mızraklı –ambos, líderes políticos kurdos encarcelados–, el 11 de enero en la prisión de Edirne. En su comunicado posterior, **Demirtas emitió un comunicado** por redes, en el que expresó apoyo a toda

iniciativa de paz, expresó confianza en Öcalan, afirmó que si las condiciones eran las adecuadas y Öcalan daba pasos le apoyarían. Enmarcó el papel de los actores políticos en fortalecer las bases para la paz y atribuyó al Gobierno y el Parlamento la responsabilidad de crear las condiciones legales y políticas para que pueda darse un llamamiento de Öcalan. También agradeció a Erdogan, Bahçeli, Özel (líder del CHP) y resto de líderes de los partidos políticos por los pasos dados y venideros de iniciativas de paz. La delegación también se reunió el 12 de enero con la co-líder del HDP Figen Yuksekdag y la exdiputada del HDP Semra Güzel, ambas encarceladas. Tras la ronda de reuniones, la delegación del DEM tenía previsto reunirse por segunda vez con Abdullah Öcalan **en la tercera semana de enero**.

El líder del PKK afirmó estar preparado para hacer un llamamiento, en referencia a un llamado al fin de la lucha armada

Por parte del PKK, el órgano paraguas Unión de las Comunidades del Kurdistán (KCK) emitió un **comunicado en enero** en el que señalaba que seguirán la voluntad de Öcalan y valoraban positivamente la reunión de la delegación del DEM con Öcalan y las discusiones y reuniones posteriores.

No obstante, advertía de que la política seguida por el Gobierno turco en Siria de ataques contra las áreas bajo control kurdo ponía en peligro el proceso de diálogo.

Entre expectativas positivas y cautela y dificultades

La existencia de pasos concretos (visitas y reuniones), las valoraciones positivas aunque con cautela por parte de los partidos políticos, la veteranía y liderazgo de los actores involucrados, las declaraciones de los representantes políticos referentes al intercambio en el seno de las reuniones de preguntas, recomendaciones, lecciones aprendidas y cautelas, la combinación de transparencia y discreción sobre los detalles de las discusiones, apuntan a un potencial nuevo intento de construir bases para un proceso negociador. Se estaría perfilando así un esquema de diálogo en varios niveles, complementario, con un papel relevante otorgado a la participación de las formaciones parlamentarias. En clave de género, destaca la inclusión por el DEM de su veterana representante política y defensora de los derechos de las mujeres, Pervin Buldan.

No obstante, existen también dificultades y elementos de incerteza, incluyendo la larga trayectoria de desconfianza entre las partes y la continuación de las medidas de represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales kurdos (incluyendo en el último trimestre nuevas destituciones de alcaldes electos, incluyendo el propio Ahmet Türk en noviembre y otras **a principios de 2025**, y la imposición de funcionarios designados por el Estado; detenciones de activistas y manifestantes, entre otros). El lenguaje antiterrorista por miembros del Gobierno y el MHP en relación a la iniciativa puede también generar distancias. Existían también recelos sobre la posición de Erdogan respecto a la nueva iniciativa y algunos análisis apuntaron a que **entre las motivaciones** podría estar

la búsqueda del AKP y el MHP del apoyo kurdo a una modificación de la Constitución que permita a Erdogan presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2028. No obstante, el propio Öcalan y también Demirtas han saludado y reconocido los pasos de Erdogan y Bahçeli. Por otra parte, **un atentado en Ankara** en octubre contra una fábrica de armas, que causó cinco muertos y 22 heridos, puso de manifiesto potenciales riesgos de *spoilers* al proceso. No obstante, el PKK, que posteriormente atribuyó a sus fuerzas el atentado, afirmó que el ataque no tenía ninguna conexión con el incipiente proceso. En paralelo, una sede del DEM fue atacada. En conjunto, se requerirán esfuerzos en construcción de confianza y bases sólidas para el nuevo incipiente proceso.

La nueva iniciativa afronta dificultades importantes, como la desconfianza entre las partes y la situación en el norte y este de Siria

Otro elemento de incertidumbre para el potencial proceso es el complejo contexto regional y la dimensión transfronteriza del propio PKK y los ataques de Türkiye contra actores kurdos en Siria. La caída del régimen autoritario sirio de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 de la mano de la ofensiva del HTS ha abierto un nuevo escenario en Siria (**Véase el análisis sobre Siria en esta publicación**) y en la región, con implicaciones e interrelaciones también para la cuestión kurda de Türkiye. Ankara, con su apoyo al HTS, sale reforzada regional y globalmente, mientras el futuro de las milicias kurdas de Siria—con vínculos con el PKK—afronta gran incertidumbre. Tras la caída de al-Assad, Türkiye y facciones pro-turcas del SNA intensificaron sus ataques contra las milicias kurdas YPG/YPJ (que, a su vez, son el principal actor de la coalición SDF, apoyadas por EEUU para combatir a ISIS) y contra su área de administración política del norte y este de Siria (AANES). Las milicias kurdas se retiraron de Tal Rifaat y, posteriormente —con intermediación de EEUU— de Manbij.

Türkiye exige la salida de Siria de combatientes kurdos no sirios de las SDF —incluyendo del PKK de Türkiye—, la disolución y desarme de las milicias kurdas YPG/YPJ y la salida de Siria de sus altos mandos, y ha amenazado con una gran operación militar. En diciembre, por primera vez, **las SDF admitieron** la presencia de combatientes del PKK en sus filas y señalaron su disposición a que marchen de Siria si se alcanza un alto el fuego total con Türkiye. También han expresado voluntad de integración de las SDF en el nuevo ejército sirio y de participación en el proceso de diálogo político sirio. No obstante, a principios de enero el **liderazgo de las YPJ** advertía de que estaban bajo ataques armados y que en esas condiciones no podían dejar las armas. El KCK —órgano paraguas en que se integra el PKK— también advirtió que los ataques de Türkiye contra las áreas que integran la AANES ponían en peligro el proceso de diálogo en Türkiye. Con todo ello, está por ver cómo evolucionará la transición en Siria y el encaje kurdo en esta, y cómo la posición de Türkiye y su enfoque hacia las YPG/YPJ y la respuesta de estas influirá en el incipiente proceso en torno a la cuestión kurda en Türkiye.

En conjunto, se ha abierto una nueva oportunidad en Türkiye de abordaje por la vía del diálogo del longevo conflicto armado entre Türkiye y el PKK y de la —más amplia— cuestión kurda en ese país. No obstante, iniciativas pasadas de negociaciones ya fracasaron y en el nuevo escenario concurren también riesgos y dificultades, especialmente relativos al contexto regional. Actores locales e internacionales tienen la oportunidad de sumar esfuerzos diplomáticos, políticos y sociales para consolidar la incipiente iniciativa y desplazar el conflicto Türkiye-PKK desde la confrontación armada a vías de discusión y abordaje político y social.



Fuente: Multinational Security Support Mission to Haiti

HAITÍ

Naciones Unidas advierte sobre un deterioro sin precedentes en la situación humanitaria y de violencia en el país

A principios de enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk declaró que en 2024 **como mínimo 5.601 personas murieron como consecuencia de la violencia de las bandas armadas** que operan en el país, y que se estima controlan alrededor del 85% de la capital, Puerto Príncipe. Tal cifra es la más alta de la historia del país y supone un incremento de más del 20% respecto del año anterior. Además, Naciones Unidas también señaló que durante el año más de 2.200 personas resultaron heridas y que casi 1.500 fueron secuestradas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también documentó 315 linchamientos de pandilleros y personas presuntamente asociadas con pandillas –en algunas ocasiones con la presunta colaboración o connivencia de agentes de la Policía– y 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias en las que participaron unidades policiales especializadas. Según un informe del International Crisis Group de noviembre, en los últimos tres años, **las bandas armadas han sido responsables de la muerte de más de 10.000 personas y desplazamiento forzoso de más de 700.000.** Ante tal situación, Türk pidió más apoyo logístico y financiero para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que fue autorizada en octubre de 2023

Naciones Unidas advirtió que la violencia vinculada a las bandas armadas provocó la muerte de más de 5.600 personas en 2024, un 20% más que el año anterior

y que a finales de 2024 debería contar con alrededor de 2.500 efectivos. De momento, sin embargo, cuenta con unos 400 agentes de policía de Kenia y otros 150 efectivos procedentes de países de América Central y el Caribe, como Jamaica, Bahamas, Belice o –la mayoría– Guatemala. Además, otros países como Barbados, Bangladesh o Chad también se han comprometido a desplegar efectivos militares y policiales. En la misma línea, durante los debates y negociaciones sobre la renovación del mandato de la MSS que se produjeron en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, ya se barajó la posibilidad de que la MSS se convirtiera en una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Aunque entonces esta opción no fructificó, a finales de octubre el presidente del Consejo Presidencial de Transición solicitó formalmente la conversión de la MSS en una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, una opción que el Gobierno de EEUU apoya abiertamente.

La situación humanitaria del país

En cuanto a las consecuencias humanitarias de la situación de violencia generalizada que vive el país, a mediados de enero la Organización Internacional para

las Migraciones (OIM) declaró que **más de un millón de personas** (1.041.000 personas) estaban desplazadas en Haití, el triple que diciembre de 2023, cuando había 315.000 personas desplazadas. Más de la mitad de las personas desplazadas eran menores. Además, según la IOM, el retorno forzado a Haití de unas 200.000 personas, la mayoría procedentes de la vecina República Dominicana, durante el último año había empeorado la situación humanitaria y de desplazamiento. A modo de ejemplo, el número de centros de acogida y evacuación de personas desplazadas solamente en Puerto ha pasado de 73 a 108 en el último año. A finales de septiembre la OIM había publicado un **informe** en que advertía que más de 700.000 personas –más de la mitad de las cuales menores– estaban desplazadas internamente en Haití. Estos datos suponen un incremento del 22% desde el mes de junio. En los seis meses anteriores a la publicación del informe, la violencia vinculada a la actividad de las bandas armadas había obligado a más de 110.000 personas a huir de sus hogares, especialmente en el municipio de Gressier (departamento Oeste), donde los ataques armados provocaron que la gran mayoría de la población del municipio se desplazara forzosamente. El 52% de las casi 703.000 personas desplazadas internas eran menores, y el 54% eran mujeres o niñas. El 65% del total de personas desplazadas tuvo que abandonar su hogar en 2024, una cifra muy superior al 27% del año 2023 o al 4% de los años 2022 o 2021. En octubre, la región metropolitana de la capital acogía a una cuarta parte de las personas desplazadas internas del país, aunque dicho porcentaje se redujo respecto de los meses anteriores porque hay una tendencia cada vez más clara de desplazamiento desde la capital hacia otras provincias del país. El informe también advirtió que un número significativo de las personas que deciden regresar a sus hogares (especialmente en la capital) tienen que volver a abandonarlos por nuevas situaciones de violencia.

Por otra parte, a finales de noviembre UNICEF declaró que el número de menores reclutados por grupos armados en Haití había aumentado un 70% en el último año, y que las previsiones iban en aumento. Según UNICEF, entre un tercio y la mitad de todos los miembros de los grupos armados son menores, y solamente en Puerto Príncipe hay 1,2 millones de menores que viven bajo la amenaza de dichas bandas. Según la agencia de Naciones Unidas, los factores que explican el reclutamiento masivo de menores por parte de bandas armadas son la creciente violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y el colapso de la mayor parte de los servicios sociales en Haití. Según UNICEF, a menudo se obliga a los menores a unirse para apoyar a sus familias o se amenaza su seguridad, y en muchos casos son reclutados después de haber sido separados de sus familiares o cuidadores, privados de protección y opciones de supervivencia. Además, en las zonas en las que no están bajo control o influencia de las bandas armadas, en ocasiones son acusados de espías e incluso asesinados por grupos de autodefensa o vigilantismo. Según Naciones Unidas, en octubre de 2024 **919 escuelas permanecían**

cerradas o estaban siendo utilizadas como refugios temporales para personas desplazadas, lo que impedía la escolarización de más de 300.000 menores.

En esta misma línea, a mediados de noviembre, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, **advirtió** que, en comparación con los datos de 2023, en 2024 se incrementaron en más del 1.000% los casos de violencia sexual contra menores, especialmente niñas. A finales de 2024, alrededor de 2,7 millones de personas vivían en zonas controladas por bandas armadas.

Según OCHA, actualmente en Haití hay cinco millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, la mitad de la población del país no dispone de los alimentos suficientes para comer y la desnutrición severa se incrementó en aproximadamente un 20% durante el 2024. En el ámbito sanitario, OCHA calcula que menos de una cuarta parte de los hospitales del país están operando con normalidad.

La situación de violencia a finales de 2024 y principios de 2025

Respecto de la situación de violencia en el país, algunas de las principales bandas armadas del país redujeron sustancialmente su actividad tras el inicio del despliegue de la MSS en el mes de junio, permitiendo así que tanto la Policía como la MSS retomara el control de numerosas zonas que hasta entonces estaban en manos de dichas pandillas y reforzar las medidas de seguridad en varias zonas de la capital. Sin embargo, en el último trimestre del 2024 las bandas armadas retomaron con fuerza sus ataques coordinados en Puerto Príncipe y en otras ciudades del país. A principios de octubre, por ejemplo, se produjo una de las **peores masacres** de los últimos años en Haití, cuando 115 personas fueron asesinadas por parte de la banda armada Gran Griff en la ciudad de Pont-Sondé (región de Artibonite), a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe. Según la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnndh), la banda acusaba a la población civil de colaborar con miembros de 'La Coalición', un grupo de autodefensa que intenta evitar las actividades delictivas de la banda. Pocos días antes de la masacre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había incluido en el listado de sanciones al líder de la banda, Luckson Elan, por considerar que las actividades de esta suponen una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. Según Naciones Unidas, la banda Gran Griff es la mayor y más poderosa del departamento de Artibonite, ha expandido su control territorial notablemente en los últimos tiempos, trafica con armas, es uno de los grupos que ha llevado a cabo el mayor número de reclutamiento de menores y ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos contra la población civil. A modo de ejemplo, entre octubre de 2023 y enero de 2024, la banda perpetró nueve secuestros en masa, en los que murieron 157 personas.

En la misma línea, a mediados de octubre la coalición de bandas armadas Viv Ansanm lanzaron una nueva oleada de ataques para intentar ocupar y controlar algunas regiones –como Solino, Tabarre 27, Fort-Dimanche o Pétion-Ville– consideradas estratégicas para su expansión territorial, provocando el despliegue adicional de efectivos policiales y el desplazamiento de miles de personas. En paralelo, en las mismas fechas, el ex líder rebelde y senador **Guy Philippe participó en una manifestación** en la ciudad de Jérémie (departamento Grand’Anse) en la que anunció su intención de liderar una “**revolución**” para liberar a Haití, derrocar el sistema actual y combatir a las bandas armadas, instando a la población a incrementar las protestas. Philippe, ex comandante de la Policía, regresó al país recientemente después de cumplir una pena de seis años de cárcel en EEUU y fundó el partido Fuerza Revolucionaria del Acuerdo Nacional (FREN). Algunos analistas han mostrado preocupación por sus apelaciones a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas y por su alianza tácita con Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP). A principios de año, tras el despido de su director, decenas de efectivos de dicho cuerpo armado, que supuestamente se encarga de la protección de determinadas zonas del país expuestas a riesgos ambientales, desertaron y se unieron a varias protestas antigubernamentales, y algunos de sus dirigentes expresaron su apoyo y lealtad a Guy Philippe.

En noviembre, la situación de inseguridad se incrementó notablemente después de que el líder de Viv Ansanm, Jimmy “Barbecue” Chérizier, declarara que el tiempo de observación de la situación por parte de las bandas armadas había terminado y que era hora de tomar en sus manos el destino del país. A la vez, otro líder de las principales bandas en la zona de Canaan (norte de Puerto Príncipe), Jeff Gwo Lwa, también pidió a la población de las regiones del Norte, de la Meseta Central, de Artibonite y del Oeste que no se dirigieran a Puerto Príncipe porque las carreteras estarían intransitables. Poco después, las bandas armadas lanzaron una nueva oleada de ataques coordinados en la capital, obligando a cerrar escuelas, negocios y varias embajadas. Además, el principal aeropuerto del país se vio obligado a cerrar y suspender vuelos después de que tres aviones que sobrevolaban la capital y un helicóptero de Naciones Unidas fueran impactados por balas. Los graves enfrentamientos entre bandas armadas y la MSS en Delmas (uno de los bastiones de Viv Ansanm) y otras regiones metropolitanas de la

capital provocaron un número no determinado de víctimas mortales, el desplazamiento de más de 40.000 personas y la evacuación de parte del personal de Naciones Unidas. A finales de noviembre, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) afirmó que **más de 100 miembros de las bandas murieron** en un período de tres días durante los intentos de invadir uno de los barrios de la capital, Pétion-Ville.

En el último trimestre del 2024, las bandas armadas llevaron a cabo ataques coordinados en varias partes del país y algunas de las peores masacres de los últimos tiempos

En diciembre, siguieron registrándose numerosos episodios de violencia y se produjo la mayor masacre de los últimos tiempos en el país. A mediados de mes, por ejemplo, varias bandas atacaron y **quemaron parcialmente el Hospital Bernard Mevs**, uno de los pocos centros médicos importantes que aún estaban en funcionamiento en la capital. En el norte, más de 100 personas murieron y más de 10.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre bandas armadas –principalmente Gran Grief, y sus bandas aliadas Palmis y Lika– y efectivos de la Policía y de la MMS cuando estos últimos intentaban recuperar el control sobre el centro de la ciudad de Petite-Rivière de Artibonite. Según fuentes locales, en varios ataques en la noche del 10 al 11 de diciembre, las mencionadas bandas mataron a más de 70 personas. Poco antes, el 6 y 7 de diciembre, la banda Wharf Jérémie **asesinó a como mínimo 207 personas** –134 hombres y 73 mujeres– en la comuna de Cité Soléil (Puerto Príncipe), siendo considerada la mayor masacre del año. Según un informe de informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la mayoría de las víctimas eran personas mayores acusadas de practicar vudú y causar la enfermedad y muerte del hijo del líder de la banda, Monel Felix, también conocido como Wa Mikanò o Micanor Altes. Otras de las personas asesinadas fueron acusadas de filtrar información a las autoridades públicas o a medios locales. Según Naciones Unidas, desde 2022 la banda de Wharf Jérémie lucha contra bandas rivales por el control de las carreteras que conducen al puerto principal de la capital y extorsiona a las empresas que transportan mercancías desde el puerto y al consorcio que administra el puerto. Esta masacre no es su primer acto violento relacionado con la religión, ya que en 2021 la banda ya ejecutó a 12 mujeres mayores acusadas de brujería. El Consejo de Transición declaró que con dicha masacre se había cruzado una línea roja y que el Estado movilizaría todas sus fuerzas para perseguir a las bandas criminales.

ÁFRICA

CHAD: Se celebran las elecciones que ponen fin a la transición iniciada en 2021

ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA): Acuerdo entre los dos países tras meses de tensiones

GUINEA: La Junta Militar incumple el acuerdo transicional de celebración de elecciones presidenciales aumentando la tensión con la oposición

MOZAMBIQUE: El país enfrenta una grave crisis política y social debido a las disputas poselectorales y a la fuerte represión

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO – RWANDA: Fracasas las iniciativas diplomáticas regionales para alcanzar un acuerdo mientras persiste la ofensiva del M23

SUDÁN: Se agudiza la crisis humanitaria en el país por la intensificación de la guerra

SUDÁN DEL SUR: Se estancan las negociaciones de paz en medio de un nuevo incumplimiento de celebración de las elecciones presidenciales

CHAD

Se celebran las elecciones que ponen fin a la transición iniciada en 2021

El 29 de diciembre tuvieron lugar **elecciones parlamentarias, regionales y municipales por primera vez en más de una década**, que ponen de manifiesto el intento del antiguo Gobierno golpista transformado en civil de dar una imagen de cambio y de compromiso con la democracia en el país centroafricano. Sin embargo, numerosos actores y organizaciones locales e internacionales cuestionaron la transparencia del proceso electoral. Las autoridades de N'Djamena han afirmado que estas elecciones pondrán fin al periodo de transición iniciado tras la muerte en 2021 del líder Idriss Déby y la toma de posesión mediante una Junta militar de su hijo, Mahamat Idriss Déby, quien fue confirmado como presidente del país tras la celebración de elecciones presidenciales en mayo de 2024. En lo que se considera un importante paso hacia la descentralización, la ciudadanía votó por los cargos de los consejos provinciales que pueden asumir las responsabilidades que antes ocupaban los gobernadores designados por el presidente; también votó por los diputados por primera vez desde 2011. El partido gobernante mantuvo una ventaja significativa, como era previsible, ya que la mayoría de los principales partidos de oposición, incluidos Les Transformateurs y Political Actors Consultation Group, boicotearon las elecciones. Las autoridades electorales afirmaron que la participación fue del 36%, aunque la oposición afirmó que fue menor. **Los observadores informaron de casos de votación fraudulenta y de votos múltiples.** Los resultados provisionales se publicarán el 15 de enero, aunque no se esperaban novedades de un proceso boicoteado por los principales partidos opositores. Las autoridades celebraron con éxito un referéndum en diciembre de 2023 que apoyó una nueva constitución que permitía al líder golpista Mahamat Déby presentarse a las elecciones presidenciales, que se celebraron en mayo.

Estas elecciones, en las que **Déby obtuvo una victoria del 61% de los votos**, se celebraron en medio de acusaciones de que su partido había manipulado la votación con la ayuda de la Agencia Nacional de Gestión Electoral (ANGE). El segundo candidato, Succès Masra, líder del partido Les Transformateurs, obtuvo el 18,5% de los votos. Masra había regresado al país en enero de 2024 tras un acuerdo de paz y fue nombrado primer ministro, en lo que muchos vieron como un intento de Déby de ganarse el apoyo de los miembros de la oposición. Sin embargo, las tensiones volvieron cuando los dos se enfrentaron en las elecciones. Masra dimitió como primer ministro y desde entonces ha vuelto a liderar la oposición. Además, los críticos también acusaron a Déby de ordenar el asesinato a candidatos de la oposición antes de las elecciones. Las fuerzas de seguridad chadianas mataron en febrero a Yaya Dillo, primo de Déby y miembro destacado de la oposición del Partido Socialista Sin Fronteras (PSF). En ese momento, se lo consideraba ampliamente el mayor rival del presidente. Las elecciones no fueron ni libres y transparentes, según diferentes organizaciones internacionales.

En paralelo, el 19 de diciembre **el Gobierno chadiano exigió a Francia la retirada de la presencia militar francesa en el país el 31 de enero**, en una decisión que diferentes análisis calificaron como un intento del presidente Déby de capitalizar el apoyo ciudadano. Tras **el fin del acuerdo de cooperación militar en noviembre**, Chad solicitó que Francia retirara el contingente de 1.000 militares establecido en el país desde hace más de 50 años. Dicho contingente ha dado apoyo a los diferentes líderes del país, incluido el padre del actual presidente, Idriss Déby, para mantenerse en su cargo, en contextos de inestabilidad y amenazas insurgentes. Francia señaló que la fecha propuesta no era viable, y se inició un diálogo a nivel técnico para acelerar el proceso. Por último, cabe destacar la **propuesta de apoyo humanitario y militar del presidente de Hungría, Viktor Orban**, al país centroafricano realizada en diciembre, como una forma de frenar la migración.

ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA)

Acuerdo entre los dos países tras meses de tensiones

El proceso de diálogo y acercamiento que tuvo lugar durante 2024 entre Somalia y Etiopía para resolver la crisis generada por el acuerdo firmado en enero de ese año entre Adís Abeba y la región somalí secesionista de Somalilandia sobre el acceso etíope al mar Rojo culminó en diciembre con la consecución de un acuerdo entre ambos países. El 11 de diciembre Somalia y Etiopía se comprometieron a alcanzar un acuerdo para resolver la crisis tras las reuniones que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, celebraron por separado en Ankara como mediadores con el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Ambos países alcanzaron un acuerdo conocido como la Declaración de Ankara, que abordaba las principales demandas de ambos países. **Somalia consiguió que Etiopía reconociera su integridad territorial y a Etiopía se le aseguró acceso a la costa somalí** desde y hacia el mar. La UA y la UE celebraron el acuerdo. La UE reiteró su apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de ambos países, y su disposición para apoyar en los esfuerzos adicionales y continuar con su participación en la mediación. No hubo informaciones de contactos con Somalilandia durante el proceso de diálogo entre ambos países y se desconoce las repercusiones del acuerdo con relación a la región somalí.

Asimismo, **ambos países pactaron llevar a cabo acuerdos comerciales mutuamente ventajosos** mediante acuerdos bilaterales, incluidos contratos, arrendamientos y modalidades similares, que permitan a Etiopía disfrutar de un acceso fiable, seguro y sostenible al mar y desde el mismo, bajo la autoridad soberana de Somalia. De igual manera, decidieron iniciar negociaciones técnicas con estos objetivos durante 2025.

El acuerdo estuvo precedido por un incremento de la tensión durante todo el año. Los esfuerzos de Türkiye por resolver la disputa comenzaron después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, visitara Ankara en mayo y le pidiera su intervención. Türkiye mantiene estrechos vínculos con Etiopía y Somalia, y entrena a las fuerzas de seguridad somalíes y les proporciona asistencia a cambio de su apoyo en una importante ruta marítima mundial. En junio Qatar también manifestó su disposición a facilitar un diálogo entre ambos países. Estas iniciativas culminaron con la celebración en Ankara de diversas rondas de negociación facilitadas por Türkiye. **La primera y segunda ronda de contactos indirectos se celebraron en julio y agosto** entre el Ministro de Relaciones Exteriores somalí, Ahmed Moalim Fiqi, y su homólogo etíope, Taye Atske Selassie. En paralelo, Somalia multiplicó las iniciativas diplomáticas para conseguir apoyo para su causa y a la vez poner presión sobre Etiopía.

GUINEA

La Junta Militar incumple el acuerdo transicional de celebración de elecciones presidenciales aumentando la tensión con la oposición

Guinea ha vivido un contexto de creciente tensión política bajo el liderazgo del presidente, general de la Junta militar, Mamadi Doumbouya. En octubre, Doumbouya intensificó su control, promoviendo su candidatura para las elecciones presidenciales no anunciadas y estableciendo medidas autoritarias, como la disolución de partidos políticos (al menos 53) y la prohibición de viajes internacionales para ministros. Además, la desaparición de varios activistas de la sociedad civil, incluidos Foniké Mengué y Mamadou Billo, aumentó la preocupación internacional sobre la represión en el país. La UE y la ONU expresaron su inquietud ante esta situación. En noviembre, Doumbouya consolidó aún más su poder al ascender a 16 oficiales del Ejército. Este movimiento fue interpretado como un intento de fortalecer su red de aliados. Mientras tanto, la oposición mantuvo su rechazo al proyecto de Constitución propuesto por el Gobierno, que no impediría la reelección de Doumbouya. Las Fuerzas Vivas de Guinea, una coalición de opositores y activistas, **convocaron protestas para exigir un gobierno civil y la salida de la Junta**.

Posteriormente, en diciembre, el Gobierno incumplió el plazo transicional para retornar al gobierno civil, previsto para el 31 de diciembre, lo que desató protestas en el país. **La oposición se mostró cada vez más escéptica** respecto a las promesas de transición de Doumbouya. Además, una estampida en un evento de fútbol en apoyo al presidente en N'Zérékoré dejó decenas de muertos, lo que obligó a suspender actos públicos de apoyo a Doumbouya. A pesar de los crecientes desafíos, el Gobierno continuó con su campaña anticorrupción, condenando a exfuncionarios del régimen de Condé, aunque la situación política sigue siendo incierta y volátil.

MOZAMBIQUE

El país enfrenta una grave crisis política y social debido a las disputas poselectorales y a la fuerte represión

En los últimos tres meses, Mozambique ha atravesado una grave crisis política y social, desencadenada por las elecciones presidenciales del 9 de octubre. Los resultados electorales, que dieron la victoria a Daniel Chapo, candidato del partido gobernante FRELIMO, fueron ampliamente impugnados por la oposición, encabezada por Venâncio Mondlane, quien afirmó haber ganado las elecciones y denunció fraude masivo. La comunidad internacional y organismos regionales como la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), que se ha mostrado **dispuesta a mediar**, expresaron su preocupación

por la situación, mientras las protestas y la violencia en las calles continúan, dejando un saldo de al menos 225 personas muertas y más de 4.000 detenidas.

Las elecciones fueron marcadas por una baja participación (43%), especialmente en el norte del país, y por acusaciones de fraude como urnas rellenas, votantes fantasma y el uso de recursos del Estado para favorecer al FRELIMO. Tras el anuncio oficial de los resultados, que confirmaron la victoria de Chapo, las protestas se intensificaron en varias ciudades, incluyendo Maputo, Nampula y Matola, enfrentándose los manifestantes con la policía y las fuerzas de seguridad. A finales de octubre, los enfrentamientos provocaron la muerte de decenas de personas y las tensiones aumentaron durante las primeras semanas de noviembre, con los opositores convocando huelgas y protestas masivas. El gobierno respondió con una fuerte represión, lo que resultó en más víctimas mortales, con la sociedad civil estimando más de 60 muertes.

El malestar continuó creciendo en diciembre, especialmente después de que el Consejo Constitucional ratificara los resultados electorales, lo que intensificó los ataques contra edificios gubernamentales y fuerzas de seguridad. A principios de diciembre, los opositores llamaron a nuevas manifestaciones, que fueron respondidas por el Gobierno con una política de "tolerancia cero". Los ataques a infraestructuras clave, como minas y plantas de energía, aumentaron, paralizando la economía y generando más muertes. Entre el 23 y el 26 de diciembre, al menos 134 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las protestas y la violencia también han afectado la seguridad en el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado, donde continúan los ataques de insurgentes vinculados al Estado Islámico, que se suman a la inestabilidad política.

A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar en la crisis, como los llamamientos de la UE, EEUU y Sudáfrica para un diálogo y la desescalada de la violencia, el Gobierno de Filipe Nyusi ha descartado la intervención extranjera y ha abogado por una solución interna a la crisis. A medida que se acerca la investidura de Chapo el 15 de enero, las tensiones podrían seguir escalando, ya que Mondlane declaró su intención de asumir la presidencia el mismo día anunciando que volvería al país antes de la investidura del nuevo presidente. Finalmente, el candidato opositor, quien había abandonado el país tras la celebración de las elecciones y el asesinato de dos de sus colaboradores más cercanos, uno de ellos su abogado, regresó a Mozambique el 9 de enero, lo que aumenta la posibilidad de un conflicto directo. La situación de Mozambique sigue siendo incierta, con graves implicaciones para la estabilidad regional y la seguridad internacional.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO – RWANDA

Fracasan las iniciativas diplomáticas regionales para alcanzar un acuerdo mientras persiste la ofensiva del M23

La situación en la República Democrática del Congo (RDC) durante el último trimestre de 2024 estuvo marcada por la intensificación de los combates, el colapso de las negociaciones diplomáticas y un clima político cada vez más tenso debido a varias propuestas de reformas constitucionales. El conflicto armado en la provincia de Kivu Norte y la vecina Ituri continuó, impulsado por los avances del grupo rebelde M23 y los ataques de otros grupos armados, mientras la tensión entre la RDC y Rwanda agravaba la crisis. Los intentos de la UA para promover un acuerdo entre la RDC y Rwanda, lo que se conoce como el proceso de Luanda, liderado por Angola, sufrieron un golpe significativo en diciembre cuando se canceló la reunión entre el presidente congolés Félix Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, que debía celebrarse el 15 de diciembre. Rwanda exigió a última hora como precondition que Kinshasa dialogara con el M23, lo que llevó al fracaso del encuentro. Este debía ser su primer encuentro cara a cara en 18 meses. El presidente de Angola, Joao Lourenço, celebró la reunión con Tshisekedi a la que no compareció Kagame.

El presidente de Angola esperaba la firma de un acuerdo provisional que abordara la principal queja de cada líder en la disputa. La RDC debería neutralizar a los rebeldes armados de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR), activos en el este de la RDC durante más de 25 años, y Rwanda debería retirar sus fuerzas, que han estado apoyando a los rebeldes armados del M23 en el mismo territorio. Las FDLR fueron creadas originalmente por hutus que huyeron de Rwanda después de participar en el genocidio contra la comunidad tutsi y contra sectores de la comunidad hutu en 1994. El M23 está compuesto esencialmente por congoleses de etnia tutsi.

El 30 de julio, Lourenço negoció un acuerdo de alto el fuego entre RDC y Rwanda, que entró en vigor el 4 de agosto. Incluía un mecanismo de verificación ad hoc para supervisar la implementación, pero dicha tregua ha sido sistemáticamente violada, especialmente desde octubre. La secuencia en la implementación es el principal obstáculo, ya que Tshisekedi y Kagame se niegan a ceder en cuestiones clave de rendición de cuentas. El borrador de acuerdo alcanzado en agosto fue rechazado por RDC, que solicitaba que la retirada de Rwanda se produjera al mismo tiempo que el desmantelamiento de las FDLR. En paralelo, expertos de RDC y Rwanda se reunieron en Luanda el 31 de octubre para desarrollar un plan armonizado para la neutralización de las FDLR y la retirada de Rwanda. Los ministros de Exteriores de ambos países aprobaron posteriormente la propuesta marco el 25 de noviembre. Esta propuesta, denominada concepto de operaciones, fue aclamada como un gran avance.

Paralelamente, el M23 logró importantes avances militares en Kivu Norte, capturando localidades clave como Matembo y controlando rutas estratégicas que conectan ciudades importantes con Goma, la capital, como son **Butembo y Beni**, al norte de la provincia. Estos avances obligaron a las fuerzas gubernamentales a retirarse, provocando nuevos desplazamientos de población. En respuesta, Tshisekedi reorganizó la cúpula militar, pero los enfrentamientos persistieron, especialmente en Lubero. Por otra parte, otros grupos armados intensificaron sus ataques en Kivu Norte e Ituri, como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), acusadas de estar vinculadas a Estado Islámico, y la milicia CODECO. **Las ADF llevaron a cabo masacres en aldeas, causando decenas de muertos, especialmente a finales de año**, mientras CODECO asesinó a líderes comunitarios y civiles en ataques aislados. Estas acciones exacerbaron la crisis humanitaria, desplazando a miles de personas y aumentando la inseguridad en la región.

El clima político se tensó aún más con la propuesta del Gobierno de Tshisekedi de reformar la constitución. **Líderes opositores como Moïse Katumbi y Martin Fayulu calificaron estas iniciativas como un intento de extender el mandato presidencial** y denunciaron una “deriva dictatorial”. La oposición se unió en una coalición amplia para enfrentar las reformas, contando también con el apoyo de la influyente Iglesia católica. A pesar de las críticas, Tshisekedi reiteró su compromiso con los cambios en su discurso sobre el estado de la nación. Finalmente, cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la misión de mantenimiento de la paz en la RDC, condenando el supuesto apoyo extranjero al M23, mientras evitaba nombrar directamente a Rwanda.

SUDÁN

Se agudiza la crisis humanitaria en el país por la intensificación de la guerra

Sudán ha continuado sumido en una de las crisis humanitarias más graves del mundo debido a la intensificación del conflicto entre el Ejército sudanés, encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandado por Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”. La guerra, que comenzó en abril de 2023, había dejado a finales de 2024 un saldo devastador con **más de 12 millones de personas desplazadas**, millones de personas en situación de **una grave escasez de alimentos** e incluso hambruna en partes de la región de Darfur.

A medida que las hostilidades se extendieron en octubre, los combates se intensificaron en el Gran Jartum, especialmente en Bahri y Omdurman, donde ambos bandos se enfrentaron por el control de zonas estratégicas, incluida la refinería de petróleo de Al-Jaili. En la región de Darfur, los combates entre el Ejército y las RSF se intensificaron, con bombardeos aéreos y ataques que



Fuente: UNICEF

mataron a decenas de personas. En el este del país, las tensiones aumentaron debido a la aparición de milicias aliadas al Ejército, lo que amplió el alcance del conflicto, incluyendo el posible involucramiento de Eritrea.

En noviembre, los enfrentamientos se extendieron a nuevas áreas como los estados de Nilo Blanco y Nilo Azul, donde las RSF atacaron puntos estratégicos. Esta expansión del conflicto en áreas previamente pacíficas, junto con las disputas étnicas alimentadas por las acciones de los combatientes de ambas partes, exacerbaron la crisis humanitaria. En el estado de Gezira, las tensiones intercomunitarias se dispararon debido a las acusaciones de que comunidades no árabes estaban apoyando a las RSF. La situación empeoró aún más en diciembre, con la intensificación de los combates en la capital y en las zonas cercanas a la frontera con Sudán del Sur. La violencia también se expandió a Darfur del Norte, donde el Ejército y las RSF se enfrentaron por el control de El Fasher, mientras que los campos de refugiados como Zamzam fueron objetivo de ataques aéreos, desplazando a miles de personas. Además, la crisis alimentaria empeoró, con la ONU advirtiendo sobre las condiciones de hambruna en cinco áreas clave de Sudán, incluidas las zonas más afectadas de Darfur.

La situación humanitaria ha empeorado debido a la **retirada de Sudán del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF)**, lo que limita los esfuerzos internacionales para monitorizar y abordar la crisis alimentaria. La retirada se produjo después de que las autoridades sudanesas acusaran a la ONU de emitir informes poco confiables. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es que la **hambruna afecta ya a millones de personas**, con 24,6 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población que necesitan ayuda alimentaria urgente.

Por otro lado, Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense anunció que el Gobierno de EEUU **declaró formalmente que las RSF cometieron genocidio durante la actual guerra civil del país**, anunciando la imposición de sanciones al comandante de las RSF, Mohammad Hamdan Dagalo.

En cuanto a los esfuerzos de mediación, Arabia Saudí intentó facilitar el diálogo entre las partes en Jeddah, pero

los avances fueron limitados. Las tensiones entre las RSF y los aliados del Ejército, incluidos países vecinos como Egipto y Chad, continúan complicando cualquier posible acuerdo de paz. Por otro lado, el presidente de Türkiye, Erdoğan, se ofreció a mediar en las conversaciones entre el Ejército y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a quienes el Ejército acusa de proporcionar armas a las RSF. Las divisiones internas de los políticos civiles y las demandas contrapuestas de los líderes de los distintos grupos en conflicto también han sido un obstáculo para cualquier solución efectiva.

SUDÁN DEL SUR

Se estancan las negociaciones de paz en medio de un nuevo incumplimiento de celebración de las elecciones presidenciales

Las negociaciones de paz en Sudán del Sur, conocidas como la Iniciativa Tumaini, enfrentaron varios obstáculos en el último trimestre. En octubre, las conversaciones se estancaron después de la retirada del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLA-IO), liderado por el vicepresidente Riek Machar. El Presidente, Salva Kiir, intentó reactivar el proceso enviando una delegación a Nairobi para discutir con el presidente de Kenia, William Ruto, sobre cómo extender el período de transición del gobierno. Posteriormente, en noviembre, Kenia hizo otro intento de reavivar las conversaciones con la visita de Ruto a la capital sursudanesa, Juba, pero las negociaciones no avanzaron debido a la falta de asistencia del Gobierno de Sudán del Sur a las reuniones programadas en Nairobi. A finales de noviembre, la delegación gubernamental finalmente llegó a la capital

keniata para continuar las discusiones, enfocándose estas en un acuerdo de reparto de poder y la implementación del acuerdo de paz firmado entre las partes en 2018. En diciembre, las conversaciones entre el Gobierno y los grupos opositores no signatarios del acuerdo de 2018 se volvieron a reanudar, pero nuevamente se estancaron rápidamente por desacuerdos sobre los protocolos acordados en el mes julio. A pesar de estos obstáculos, se anunció que las conversaciones continuarán en enero de 2025, aunque persisten dudas sobre su éxito.

De forma paralela, las elecciones previstas para celebrarse en diciembre de 2024, que debían poner fin al período transicional en el país, se volvieron a suspender debido a varios factores relacionados con la situación política y de seguridad en el país. A pesar de los acuerdos de paz alcanzados en 2018, que establecían un marco para la celebración de elecciones democráticas, la implementación de estos acuerdos sigue siendo lenta y enfrentando varios obstáculos, entre ellos, la falta de un consenso definitivo sobre la distribución del poder entre el Gobierno y la oposición, así como la inseguridad y los desacuerdos sobre el proceso electoral. Ambos temas contribuyeron a la decisión del Gobierno de suspender las elecciones. El Gobierno de Kiir propuso una nueva extensión de la transición política de dos años que fue respaldada por algunos grupos de oposición, aunque otros se opusieron, exigiendo un calendario electoral más claro y la celebración de elecciones en la fecha prevista. La suspensión de las elecciones refleja la inestabilidad persistente en el país, donde las tensiones entre las facciones políticas y la falta de un proceso de reconciliación efectiva siguen siendo desafíos clave para el logro de una paz duradera y una transición democrática efectiva.

AMÉRICA

MÉXICO: El número de asesinatos en 2024 supera los 30.000

MÉXICO

El número de asesinatos en 2024 supera los 30.000

El Gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), declaró a principios de enero que en 2024 se registraron 30.057 homicidios en México, un 1,1% más que en 2023 (29.713). Siete estados concentraron casi el 50% de los homicidios: Guanajuato (3.151 asesinatos, 10,5%); Baja California (2.368 asesinatos, 7,9%); Estado de México (2.258 homicidios, 7,5%); Chihuahua (2.004 asesinatos, 6,7%); Jalisco (1.804 homicidios, 6%); Guerrero (1.738

asesinatos, 5,8%) y Nuevo León (1.539 homicidios, 5,1%). En contraste, hubo varios estados con una incidencia relativamente baja de homicidios, como Yucatán (44 homicidios), Durango (69), Baja California Sur (69), Campeche (98), Coahuila (111) o Aguascalientes (118). Según el Gobierno, una media de 82 personas fueron asesinadas cada día. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue el más violento de la historia reciente del país, con 188.987 homicidios. Tal cifra es un 38% mayor a la que se registró durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018, con 137.289 homicidios dolosos), un 84% superior a la del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012, con 102.859 asesinatos), y un 153% más alto que en el mandato de Vicente Fox

(2000-2006, con 74.577 homicidios). Sin embargo, el 9 de enero la presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que en los primeros 100 días de su administración –asumió el cargo el 1 de octubre– el promedio diario de víctimas de homicidio doloso **disminuyó** en un 16,3%, y atribuyó tal disminución a la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de su Gobierno.

Por otra parte, según datos de la organización Causa en Común, hechos públicos en enero, entre enero y noviembre de 2023 hubo 4.270 **atrocidades** –388 por mes–, y se registraron 466 masacres. Además, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advirtió que en 2024 se registró el **asesinato de 2.243 menores** –456 niñas y 1.787 niños–, un incremento del 6,5% respecto del 2023. Según REDIM, en 2024 hubo 73 casos de feminicidios de niñas y adolescentes, cinco más que en 2023.

Por otra parte, varios medios señalaron que los comicios presidenciales de junio de 2024 fueron los más violentos de la historia del país, ya que se registraron 889 víctimas mortales, incluidas 39 víctimas entre candidatos y aspirantes a cargos públicos. Los estados más afectados por episodios de violencia política y electoral fueron Guerrero, Michoacán y Chiapas. Tales cifras indican que la **violencia política** se incrementó en un 197% en comparación con 2021 y en un 133% frente a 2018,

fecha de las anteriores elecciones presidenciales. En la misma línea, según el centro de investigación **ACLED**, entre enero y noviembre de 2024 se registraron más de 500 episodios de violencia política. De estos, más de 330 se produjeron entre el inicio de la campaña federal el 1 de marzo y el día de la votación el 2 de junio, incluyendo 95 incidentes que provocaron la muerte de una o más personas. Alrededor del 40% de los incidentes violentos durante el ciclo electoral de 2024 tuvieron como objetivo a candidatos que se postulaban a un cargo público. Según ACLED, la competencia entre los grupos del crimen organizado motivó gran parte de la violencia. De hecho, seis de los 10 estados que registraron la mayor cantidad de eventos de violencia política contra figuras políticas también se encuentran entre los 10 más afectados por la violencia ejercida por las organizaciones de crimen organizado.

Según **Reporteros Sin Fronteras**, México siguió siendo en 2024 uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pues fue el tercer país del mundo (solamente por detrás de Palestina y Pakistán) con mayor número de periodistas asesinados. Además, México concentra casi una tercera parte (30 sobre un total de 95) de periodistas secuestrados en el mundo. Según la **UNESCO**, siete periodistas fueron asesinados en 2024 –igual que en 2023–, una cifra claramente inferior a los 19 del año 2022.

ASIA Y EL PACÍFICO

CHINA – TAIWÁN: Taiwán declara que en 2024 el número de incursiones aéreas por parte de China se incrementó en un 80%

INDIA (MANIPUR): Se produce una nueva oleada de violencia en el estado

INDIA – CHINA: Nuevo acuerdo que permite disminuir la tensión en la disputa fronteriza que mantienen ambos países

MYANMAR: Las acciones de los grupos armados llevan al régimen militar a su momento de mayor debilidad desde el golpe de 2021

CHINA – TAIWÁN

Taiwán declara que en 2024 el número de incursiones aéreas por parte de China se incrementó en un 80%

A principios de enero, el Gobierno de Taiwán declaró que durante 2024 se había incrementado notablemente la presión militar sobre la isla por parte de China. El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que en 2024 se registraron 3.067 incursiones de aeronaves militares chinas en los alrededores de Taiwán, **un aumento del 80% respecto al año anterior** y el máximo histórico desde que se comenzó a documentar esta actividad. En 2022, el número de vuelos militares chinos sobre la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ) de facto de Taiwán (1.727) **ya se había duplicado** respecto del año anterior, y tal cifra fue relativamente parecida (1.703) en 2023. A finales

de noviembre, el comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en el Comando Indo-Pacífico había declarado que en los cinco meses anteriores el Ejército chino **había incrementado sus vuelos alrededor de Taiwán en un 300%**, ya fueran violaciones de la ADIZ o cruces de la “línea media” del Estrecho de Taiwán. De igual forma, en enero Taipei declaró que en 2024 sufrió una media de 2,4 millones de ciberataques diarios –el doble que en 2023–, la gran mayoría provenientes de fuentes cibernéticas chinas. Un informe de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán señaló que más del 80% de los casos en 2024 se dirigieron a agencias gubernamentales y que los ciberataques de la República Popular de China en el campo de las comunicaciones aumentaron un 650% en 2024 –el mayor aumento de cualquier campo–, un 70% en el ámbito del transporte y un 57% en la cadena de

suministro de defensa. Taipei denunció que tales cifras se enmarcan en una estrategia más amplia por parte de China de utilizar la desinformación y las cuentas falsas para generar entre la población taiwanesa –especialmente entre la juventud– un sentimiento más favorable hacia China. En la misma línea, a principios de enero la Oficina Nacional de Estadística de Taiwán reveló que en 2024 los elementos de **desinformación** –mayoritariamente provenientes de China– se incrementaron en un 60% respecto del año anterior, centrándose en gran medida en noticias orientadas a aumentar el escepticismo sobre la fiabilidad de la asistencia estadounidense a Taiwán, la competencia del Gobierno del presidente Lai Ching-te o la eficacia del ejército taiwanés.

En tal contexto, el 4 de enero, la Guardia Costera de Taiwán interceptó un barco chino sospechoso de dañar un **cable submarino** al norte de Taiwán y, dos días más tarde, ahuyentó a otro barco de China cuando se aproximaba a una zona con cables submarinos. El Gobierno de Taiwán pidió ayuda a Corea del Sur para investigar el incidente, declaró que es del todo improbable que los cortes de cables puedan ser fortuitos e involuntarios y denunció que en los últimos años varios barcos chinos han cortado cables submarinos cerca de Taiwán varias veces con el objetivo último de afectar las comunicaciones en Taiwán y aislarlo informativamente.

Por otra parte, en enero la Oficina Presidencial de Taiwán llevó a cabo su primer **simulacro de guerra con China**, alegando la creciente ambición y asertividad de las acciones de China en el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán. El simulacro incluyó un escenario de cooperación de China con Irán, Corea del Norte y Rusia y tenía el objetivo de comprobar si Taiwán es capaz de hacer frente a un ataque o bloqueo. El presidente de Taiwán, William Lai, reiteró su llamamiento a fortalecer su capacidad de resiliencia defensiva de la sociedad taiwanesa en su conjunto ante desastres a gran escala, amenazas, invasiones, y campañas de contrainformación. Para tal propósito, en junio de 2024 el Gobierno creó del Comité de Resiliencia de Defensa de toda la Sociedad, que se reunió por primera vez en septiembre. En 2024, el **servicio militar obligatorio** pasó de ser de cuatro meses a un año. En la misma línea, a principios de enero Taiwán inició tres días de ejercicios militares en los que simuló la repulsión de una incursión china.

A mediados de diciembre, China había llevado a cabo **las mayores operaciones navales de las últimas tres décadas**, desplegando alrededor de 90 barcos desde las islas del sur de Japón hasta el Mar de China Meridional. El Ministerio de Defensa de Taiwán también declaró haber detectado 47 aviones de guerra y 12 buques navales chinos cerca de la isla y señaló que China tardó más de dos meses en reunir todos los barcos y utilizó a miles de soldados de la Armada para la operación. El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló que el alcance del despliegue sugería que China no sólo estaba tratando de demostrar su capacidad de asfixia de Taiwán, sino también su capacidad de

bloquear la posible ayuda de países aliados de EEUU en la región, como Japón o Filipinas. Ante la cercanía de las maniobras navales de las costas de Taiwán, el Gobierno decretó el nivel de alerta máximo y activó el centro de respuesta a emergencias. Numerosos medios señalaron que las operaciones navales de China estaban relacionadas con la visita que a finales de noviembre el presidente Lai Ching-te había hecho a los tres aliados diplomáticos de la isla en la región del Pacífico –Islas Marshall, Tuvalu y Palau–, con escalas en los territorios estadounidenses de Hawai y Guam.

INDIA (MANIPUR)

Se produce una nueva oleada de violencia en el estado

Se produjeron **nuevos episodios de violencia en el estado indio de Manipur**, provocando varias víctimas mortales, así como nuevas restricciones a la comunicación y la movilidad decretadas por el Gobierno. Se trataría de los episodios más graves de violencia desde que en mayo de 2023 la tensión escaló en el estado tras el reconocimiento del estatus de “tribu registrada” a la población meitei de Manipur, grupo étnico mayoritario. El 7 de noviembre se produjo un **ataque contra la población de Zairawan**, en el distrito de Jiribam por parte de un grupo armado meitei, en el que una mujer hmar –tribu kuki– habría sido violada. Su cuerpo apareció posteriormente calcinado –se señaló que había sido quemada viva– y también fueron quemadas varias casas. Medios de comunicación señalaron que la población kuki había acusado a las fuerzas de seguridad no haber intervenido para proteger la aldea. El marido de la víctima aseguró que los atacantes formaban parte de la organización Arambai Tenggol. Integrantes de esta organización tienen vínculos con el rey titular de Manipur y actual parlamentario en la asamblea del estado. Días después, se produjeron dos nuevos incidentes de violencia. En primer lugar, se produjeron dos ataques simultáneos contra una comisaría de policía en Borobekra y un campamento de la Fuerza Policial de Reserva Central también en el distrito de Jiribam. Como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron tras estos ataques, murieron 10 hombres hmar, acusados de formar parte de un grupo insurgente. Por otra parte, aparecieron los cuerpos de dos hombres meiteis residentes en un campo para población desplazada interna adyacente



Fuente: HRW

a la comisaría de Policía de Borobekra. Otras dos personas de este mismo campo fueron halladas heridas y ante la desaparición de otras seis personas meiteis se produjo un despliegue policial en la zona.

Además, las autoridades impusieron la legislación antiterrorista conocida como **Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)**, que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su utilización en los estados de la región del noreste de la India para dar amparo a múltiples violaciones de derechos humanos en las operaciones de las fuerzas de seguridad indias contra los grupos armados de oposición que operan en la región. Se produjeron protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad por parte de grupos de la sociedad civil hmar y de familiares de las personas fallecidas ante los retrasos en las autopsias de los 10 hombres hmar que habían muerto en los enfrentamientos con la Policía. En los días posteriores aparecieron los seis cuerpos de las personas desaparecidas (tres mujeres y tres menores) flotando en el río Barak. Esto dio lugar a **múltiples protestas en la capital** del estado, Imphal, y se produjeron ataques contra viviendas de varios parlamentarios estatales del partido gobernante BJP e incluso la casa del ministro jefe de Manipur fue atacada por un grupo de asaltantes. Tras estos disturbios se produjeron numerosas detenciones, se impuso el toque de queda en varios distritos del estado y se suspendió el acceso a internet.

El Gobierno indio señaló que **desde la escalada de la violencia que se inició en mayo de 2023 se han registrado 258 muertes**. Desde ese mes se han repetido los episodios de enfrentamientos intercomunitarios, así como entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados que operan en el estado. Además, se ha acentuado la división étnica del estado con cada vez más territorios habitados de forma homogénea por un grupo étnico, reduciéndose las zonas mixtas. Se informó también de que se había producido un despliegue de 9.000 policías adicionales desde el incremento de la violencia en noviembre.

INDIA – CHINA

Nuevo acuerdo que permite disminuir la tensión en la disputa fronteriza que mantienen ambos países

A finales del mes de octubre **India y China alcanzaron un acuerdo importante para reducir la tensión entre ambos países por la disputa fronteriza en torno a la Línea de Control Actual** –denominación que recibe la frontera de facto entre los dos países–. La Línea Actual de Control tiene una extensión de 3.488 km. Esta disputa data de la guerra sino-india de 1962 y escaló significativamente en 2020, cuando por primera vez desde 1975 se produjeron enfrentamientos directos en el valle de Galwan entre las fuerzas de seguridad chinas e indias causando víctimas mortales, 20 soldados indios y cuatro soldados chinos. El

acuerdo, que no resuelve el contencioso que mantienen por la definición fronteriza, sí rebaja la tensión puesto que contempla que ambos retirarán tropas, dismantlarán la infraestructura temporal (como tiendas y cabañas) y reanudarán las patrullas anteriores a 2020 en zonas en disputa como Depsang y Demchok, en el este del territorio indio de Ladakh. Así pues, el acuerdo prevé fundamentalmente la retirada y el patrullaje pacífico de la frontera como camino para reducir las tensiones entre las dos potencias. En palabras del ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, el acuerdo representaba el retorno a la situación fronteriza de 2020 previa al estallido de la violencia. Desde ese año, y en paralelo a la escalada de la crisis, se habían producido encuentros y negociaciones entre ambos países, especialmente a nivel militar, para tratar de reconducir el desencuentro y evitar nuevos episodios de violencia. Las negociaciones se habían intensificado en las semanas previas a que se alcanzara el pacto con reuniones de carácter diplomático y militar. No obstante, no trascendió si el acuerdo también implicaba la retirada de los miles de soldados adicionales que se habían desplegado en la zona fronteriza tras la escalada de la violencia en 2020.

El acuerdo se produjo poco antes de la celebración de la cumbre de los BRICS en Rusia a finales de octubre, a la que asistieron los mandatarios de ambos países. El secretario de Exteriores indio, Vikram Misri, hizo un anuncio ante la prensa un día antes del inicio de la cumbre en Rusia en una comparecencia sobre la participación india en la cumbre. Posteriormente China confirmó el acuerdo. De forma paralela a la cumbre **el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvieron un encuentro bilateral**, escenificando así el pacto, en la que representaba la primera reunión entre ambos en cinco años. El acuerdo trasciende la disputa fronteriza que mantienen China e India y se enmarca en el contexto internacional de alianzas y de pugna por el liderazgo regional, así como el interés de ambos en mantener las interacciones económicas entre los dos países más poblados de la región y el mundo. Además, venía precedido de una desescalada en la retórica entre ambos mandatarios con respecto al otro y con algunos reconocimientos públicos de la importancia de las relaciones bilaterales. Fruto del encuentro entre Modi y Xi se acordó que se reiniciaría el diálogo bilateral entre los ministerios de Exteriores, incluyendo al nivel de los ministros, para reconstruir y estabilizar las relaciones bilaterales. En los últimos años, el diálogo entre ambos países se había limitado casi exclusivamente a la cuestión fronteriza. Además, se acordó la celebración de una reunión relativa a la disputa fronteriza entre los máximos encargados de esta cuestión de cada país, el Asesor de Seguridad Nacional (NSA), Ajit Doval, y el ministro de Relaciones Exteriores de China y alto miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, Wang Yi. **Esta reunión tuvo lugar en Beijing el 18 de diciembre** y en ella se acordó la aceleración de la resolución de la disputa fronteriza mediante una mayor especificación de los

acuerdos. Además, se discutió sobre la importancia de incrementar el comercio y la cooperación transfronteriza incluyendo la reanudación de la peregrinación india a la región autónoma china de Xizang. En noviembre se había confirmado que se habían iniciado las patrullas de verificación, tal y como se había establecido en el acuerdo.

MYANMAR

Las acciones de los grupos armados llevan al régimen militar a su momento de mayor debilidad desde el golpe de 2021

El régimen militar de Myanmar se halla en su momento de mayor debilidad política y militar desde el golpe de Estado que perpetró en febrero de 2021. Este golpe de Estado impidió la conformación del Parlamento resultante de las elecciones que habían tenido lugar en noviembre de 2020 y en el que el partido NLD, encabezado por la histórica líder birmana Aung San Suu Kyi, había obtenido una abrumadora victoria. Desde entonces, el país se ha visto sumido en una espiral de violencia –a las insurgencias étnicas activas en las últimas décadas se han unido grupos armados de resistencia establecidos tras el golpe de Estado– y crisis política y económica. En el tercer año tras el golpe de Estado el régimen militar ha sufrido importantes derrotas, que evidencian una situación de debilidad, si bien el Ejército ha respondido intensificando las operaciones militares para tratar de recuperar territorios capturados por diferentes grupos insurgentes.

Tras el lanzamiento en el mes de junio de la segunda parte de la conocida como Operación 1027, se produjo en agosto la **captura del Comando Militar Regional del Nordeste, en la ciudad de Lashio, en el estado Shan y la principal pérdida militar hasta el momento**. La Operación 1027 se inició en octubre de 2023 por los grupos armados que integran la Alianza de los Tres Hermanos –MNDAA (grupo armado kokang), TNLA (grupo armado ta'ang) y AA (grupo armado rakáin)– y supuso la mayor ofensiva contra las fuerzas de seguridad de Myanmar tras el golpe de Estado de 2021, con la captura de varias ciudades y la interrupción de la circulación por diferentes rutas que comunican Myanmar con China. Además de la captura de Lashio por parte del grupo armado MNDAA se produjo también la toma de Mogoke, un centro minero de gran importancia en la región de Mandalay. Se abrió así la posibilidad de que la insurgencia armada fuera capaz de capturar también la ciudad de Mandalay, feudo del régimen. La toma de estos dos emplazamientos supuso un duro revés para las fuerzas de seguridad birmanas, que en los últimos meses del año intensificaron su respuesta

militar con constantes bombardeos sobre objetivos civiles. En paralelo, la insurgencia también prosiguió con sus acciones armadas en diferentes zonas del país logrando el control de importantes porciones de las fronteras del país. **En diciembre, el grupo armado rakhine AA logró el control total de los 270 kilómetros de frontera entre Myanmar y Bangladesh** y prácticamente el control del estado Rakhine así como porciones del estado Chin. Además, con la captura el 20 de diciembre de la ciudad de Ann logró el **control de la sede central del Comando Regional del Oeste**, segundo comando regional en caer en manos rebeldes en los últimos meses. Otros grupos armados también lograron controlar múltiples municipios en diferentes zonas del país debilitando enormemente el poder territorial del Estado.

Algunos análisis advirtieron que, si los grupos armados lograban consolidar sus avances territoriales, en 2025 podrían poner abrir nuevos frentes de batalla más allá de las zonas étnicas, trasladándose hacia el centro del país a las regiones Mandalay, Sagaing y Magway. No obstante, otras veces apuntaron a las dificultades para que los grupos armados étnicos operaran más allá de sus zonas de influencia.

En paralelo al incremento de la violencia hubo diferentes intentos de negociación como consecuencia de la presión ejercida por el Gobierno chino tanto sobre la insurgencia como sobre el Ejecutivo birmano, en un intento de estabilizar el país y defender sus intereses. A finales de noviembre el TNLA se mostró propicio a negociar con la Junta Militar y pocos días después del anuncio del TNLA, el MNDAA comunicó un alto el fuego unilateral con el que pretendía iniciar negociaciones con el Gobierno birmano y la facilitación china. En los días previos el líder del grupo armado MNDAA había sido detenido en China como medida de presión para que el MNDAA accediera a negociar. El grupo armado señaló que estaba dispuesto a negociar sobre la situación de Lashio. También el grupo armado kachin KIA anunció que había enviado una delegación a China para dialogar con el Gobierno del país vecino en respuesta a una invitación de este. Según trascendió posteriormente, en las conversaciones, a las que habrían asistido miembros del Gobierno chino de mayor rango que los que habitualmente participan en las negociaciones con los grupos armados, se habría abordado la captura de varias bases militares por parte de la insurgencia. En paralelo China invitó a Min Aung Hlaing a visitar el país por primera vez desde el golpe militar de 2021 y estaría apoyando la celebración de elecciones en Myanmar durante 2025, incluyendo ayuda económica para la confección de un censo electoral previo a los comicios.

EUROPA

RUSIA – UCRANIA: Discusiones sobre posibles futuras negociaciones, pero incerteza ante la nueva Administración Trump

SERBIA – KOSOVO: Incremento de tensiones y obstáculos en las negociaciones

RUSIA – UCRANIA

Discusiones sobre posibles futuras negociaciones, pero incerteza ante la nueva Administración Trump

Se intensifican las discusiones sobre eventuales futuros escenarios de negociación, influidas por el contexto de elección de Donald Trump como nuevo presidente estadounidense y por las dinámicas militares (avances de Rusia en el Donbás, dificultades de Ucrania para la movilización de hombres para el combate, entre otros). En campaña electoral Trump amenazó con finalizar la ayuda militar a Ucrania, instó a las partes a negociaciones y se atribuyó la capacidad de resolver el conflicto en 24 horas, posición que generó incerteza en el Gobierno ucraniano. Con posterioridad a su victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump –que toma posesión el 20 de enero– llamó en diciembre a Rusia y Ucrania a un **alto el fuego inmediato** y a negociaciones. **Analistas señalaron** ese mes que diversos asesores han presentado a Trump y en la esfera pública ideas y propuestas, que incluían elementos como una postergación de largo plazo de la invitación de entrada en la OTAN. **Trump señaló que su equipo** trabajaba en diciembre en la elaboración de un plan para la finalización de la guerra. Keith Kellog, general retirado designado por Trump para ser su enviado especial para Ucrania y Rusia y **co-autor de una de esas propuestas**, afirmó en enero que esperaba que las partes en conflicto pudieran llegar a una solución en un **plazo de 100 días** y que Trump trabajaría por una solución satisfactoria para las dos partes. Por otra parte, medios informaron de que **Kellog posponía su viaje** a Ucrania hasta después de la toma de posesión de Trump, frente al plan inicial para principios de enero.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado voluntad de **trabajar directamente con Trump**. En diciembre **ambos mantuvieron una reunión** auspiciada por el presidente francés, que Zelenski calificó de productiva. Ha habido también **conversaciones** entre una delegación encabezada por el jefe de la oficina presidencial, Andrii Yermak, vicepresidente electo J. D. Vance, el futuro consejero de seguridad nacional, Mike Walt, y el enviado especial Kellog. En su comparecencia de prensa anual de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo estar dispuesto a reunirse con Donald Trump en cualquier momento. **Suiza ofreció** en enero organizar una reunión entre Trump y Putin si ambas partes tenían interés.

En relación a las posiciones de las partes, a finales de noviembre el presidente ucraniano realizó declaraciones

que suponían un giro en su posición hacia eventuales negociaciones. Volodimir Zelenski señaló que Ucrania podría **renunciar de manera temporal** a la parte de su territorio actualmente bajo control ruso si recibía garantías de seguridad bajo el paraguas de la OTAN. Ucrania aceptaría relegar a negociaciones futuras por vías diplomáticas el retorno de su territorio ocupado por Rusia, sin que en ningún caso eso equivaliera a un reconocimiento del territorio ocupado como territorio de Rusia. Supone un cambio respecto a su posición anterior, en que reclamaba la retirada de Rusia de todo el territorio de Ucrania, incluyendo el Donbás y Crimea, como precondition a cualquier alto el fuego.

No obstante, más allá de la dimensión de control de territorio, uno de los elementos de dificultad continúa siendo la cuestión de las garantías de seguridad y las exigencias de Rusia de desmilitarización. Por una parte, Ucrania sigue defendiendo la entrada del país en la OTAN, aunque asume que no habrá una invitación mientras continúe la guerra de Rusia. Demanda garantías de seguridad bajo el paraguas de la OTAN, que podrían tener la forma de garantías por parte de países individuales de la OTAN. **Defiende también que EEUU** sea uno de los países que otorguen garantías de seguridad y considera que sin este país las garantías no serían suficientes. Ucrania y aliados europeos abordaron algunas discusiones sobre eventuales despliegues de fuerzas europeas en escenarios de post-acuerdo, sin consenso ni detalles, y con **algunos análisis** advirtiendo de riesgos. Asimismo, **Ucrania rechaza la exigencia rusa de reducir su Ejército**, demanda que Rusia ha expresado en diversas ocasiones (“desmilitarización”) en referencia al tamaño y capacidades de las fuerzas armadas ucranianas. Desde la perspectiva ucraniana, ante la falta de garantías totales de que Rusia no vuelva a lanzar una guerra, Ucrania no acepta reducir su Ejército. En esa línea, Ucrania presentó en octubre su llamado **“plan de victoria”** ante el Parlamento ucraniano, orientado a obtener apoyo externo para el fortalecimiento militar de Ucrania y a mantener en agenda su demanda de entrada en la OTAN. Está por ver cómo avanzará el diálogo entre Ucrania y la nueva administración de Trump –y demás aliados internacionales– en relación a las garantías de seguridad –y al conjunto de elementos que configuran demandas y líneas rojas de cada parte. En todo caso, la persistencia de Rusia en la invasión y la priorización del foco militar para el abordaje de las garantías de seguridad apuntan a la intensificación de la tendencia de militarización y escalada de gasto militar en el continente.

SERBIA – KOSOVO

Incremento de tensiones y obstáculos en las negociaciones

Se intensifica la tensión entre Serbia y Kosovo en los últimos meses. Entre los elementos de tensión recientes, se produjo en noviembre una **explosión en Zubin Potok** (norte de Kosovo) en un canal suministrador de agua a dos centrales eléctricas claves de Kosovo y principales generadoras de la electricidad en el territorio. La infraestructura también suministra agua a cientos de miles de personas en la zona norte de Kosovo y a parte de la capital. El Gobierno kosovar acusó a Serbia de haber orquestado el ataque, dirigiendo y apoyando a grupos e individuos que lo habrían perpetrado. Serbia negó su implicación, acusó a Kosovo de instrumentalizar el ataque para incrementar su control sobre el norte de Kosovo y ofreció cooperación en la investigación. Gobiernos y actores internacionales condenaron los hechos. La OTAN incrementó la presencia de su misión, KFOR, en la zona afectada –de mayoría serbokosovar–, pero **no autorizó al Gobierno de Kosovo** a desplegar sus fuerzas de seguridad (KSF) a la zona –en base a un acuerdo de la OTAN y Kosovo de 2013, las KSF han de solicitar autorización previa a la OTAN para ser desplegadas en el norte.

El ataque se produce 14 meses después de los graves hechos de septiembre de 2023 en el norte de Kosovo en que una emboscada paramilitar contra una patrulla policía y un atrincheramiento posterior en el monasterio de Banjska (norte de Kosovo) por una treintena de hombres armados resultaron en la muerte de un policía y tres asaltantes, con incautación de armas pesadas y explosivos. En aquella ocasión Kosovo también acusó a Serbia de organizar el asalto. En septiembre de 2024 la Fiscalía kosovar presentó cargos contra 45 personas por los hechos de 2023, incluyendo Milan Radoičić, exvicepresidente del principal partido serbokosovar, Lista Serbia, formación apoyada por Serbia. En diciembre el primer ministro kosovar, **Albin Kurti**, **acusó a Serbia** de no

extraditar a Radoičić y de coordinarse con él para llevar a cabo una guerra híbrida contra Kosovo. Kurti advirtió del riesgo de nuevos ataques antes y después de Año Nuevo.

Las tensiones se incrementaron también en torno a la decisión de la Comisión Electoral Central del 23 de diciembre de rechazar la participación del partido serbokosovar Lista Serbia en las elecciones parlamentarias de Kosovo del 9 de febrero, medida criticada por la formación afectada. Lista Serbia había anunciado previamente su decisión de participar en los comicios, tras el periodo de boicot a las instituciones kosovares desde su salida de estas en noviembre de 2022. La UE advirtió también a Kosovo sobre el retroceso que supondría la prohibición de participación de Lista Serbia. La decisión fue finalmente revocada y el partido fue autorizado a participar.

En conjunto, las tensiones entre Serbia y Kosovo continuaron influyendo negativamente en el proceso negociador, que continuó en gran parte estancado en los últimos meses. Los principales elementos de confrontación continuaban siendo la cuestión del establecimiento de una asociación/comunidad de municipios de mayoría serbia de Kosovo (A/CSMM, por sus siglas en inglés) y la entrada de Kosovo en organizaciones internacionales y el reconocimiento por Serbia de documentos y símbolos naciones, todos ellos puntos del llamado Acuerdo sobre la Senda hacia la Normalización de las Relaciones entre Kosovo y Serbia (2023) y su anexo asociado. En las **Conclusiones del Consejo de la UE** de diciembre de 2024, la UE –facilitadora del proceso de diálogo– instó de nuevo a las partes a implementar el acuerdo. El representante especial de la UE para el Diálogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajčák, se reunió con los negociadores jefe de Serbia y Kosovo el 17 de diciembre en Bruselas, encuentro en el que abordaron esos dos y otros puntos. Pese a los obstáculos y desacuerdos en los principales temas de conflicto, las partes sí acordaron los términos de referencia para el establecimiento de una **comisión conjunta sobre personas desaparecidas**, respaldada ya por las partes en 2023.

ORIENTE MEDIO

ISRAEL – HEZBOLLAH: Acuerdo de cese el fuego se mantiene en contexto de fragilidad

ISRAEL – PALESTINA: Investigaciones elevan cifra de muertes en Gaza y refuerzan acusaciones de genocidio contra Israel

ISRAEL – HEZBOLLAH

Acuerdo de cese el fuego se mantiene en contexto de fragilidad

Después de 13 meses de enfrentamientos, más de 4.000 muertes y el desplazamiento de un millón de personas mayoritariamente en Líbano, Israel y Hezbollah acuerdan un cese el fuego. Según el pacto, mediado por Francia y

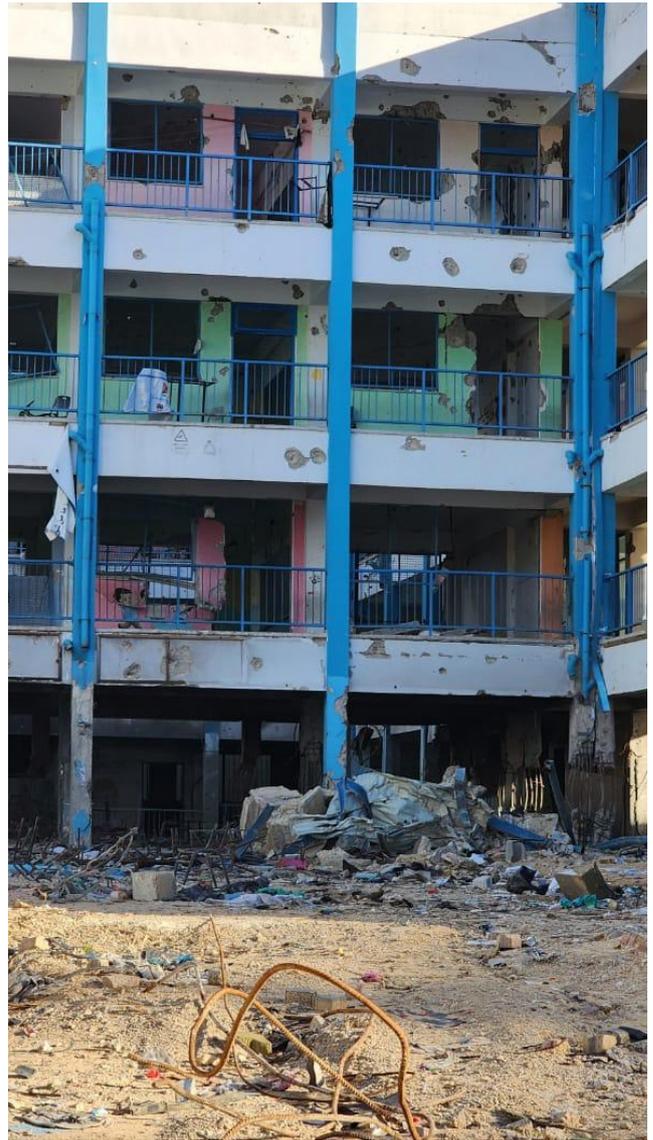
EEUU y que entró en vigor el 27 de noviembre, el Gobierno libanés evitará que Hezbollah y otros grupos armados lancen ataques contra Israel, mientras que Israel debe suspender sus ofensivas en Líbano. El acuerdo también establece que Israel debe retirarse del sur de Líbano y entregar el control del territorio a las Fuerzas Armadas Libanesas y a la misión de la ONU en la zona (UNIFIL) en un plazo de 60 días. Desde principios de octubre, Israel había expandido su ofensiva aérea y había lanzado una incursión terrestre

en territorio libanés. Aunque en términos generales los niveles de violencia han descendido, las partes se acusan mutuamente de violaciones al acuerdo y en diciembre se registraron múltiples incidentes con resultado de muerte de numerosas personas. A finales de diciembre, UNIFIL también expresó su preocupación por la **continua destrucción por parte de las fuerzas israelíes de áreas residenciales, tierra agrícola y redes de carreteras en el sur de Líbano**. Según trascendió en círculos diplomáticos, EEUU estaría buscando una extensión del plazo de 60 días, que vence el 27 de enero. Informaciones de prensa sostienen que el Gobierno israelí pretende mantener sus tropas en territorio libanés más allá de esa fecha y que **a principios de 2025 se había retirado de tan solo dos de las docenas de localidades que ha ocupado en el sur de Líbano**. Cabe destacar que durante el trimestre la situación de Hezbollah se vio afectada por la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, uno de sus aliados regionales y país clave en sus líneas de suministros y comunicación con Irán (véase análisis sobre Siria en esta publicación). En otros desarrollos relevantes, cabe mencionar que el 9 de enero el comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas Joseph Aoun fue escogido como presidente, poniendo fin así a un vacío de dos años en el cargo debido a la incapacidad de las fuerzas políticas libanesas de ponerse de acuerdo en un candidato. Días más tarde, el 13 de enero, el Parlamento libanés aprobó la **nominación de un nuevo primer ministro**, Nawaf Salam, quien deberá liderar la conformación de un nuevo gobierno, ya que el actual se encuentra en funciones desde las elecciones legislativas de mayo de 2022. Salam se desempeñaba como presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

ISRAEL – PALESTINA

Investigaciones elevan cifra de muertes en Gaza y refuerzan acusaciones de genocidio contra Israel

En el último trimestre una serie de investigaciones de centros académicos y organizaciones de derechos humanos de referencia aportan nuevas evidencias que, por un lado, elevan la cifra total de muertes en Gaza producto de la ofensiva israelí y, por otro, refuerzan las pruebas sobre la comisión de genocidio contra la población palestina por parte de Israel. Una investigación liderada por un equipo de la Universidad de Yale concluyó que la cifra de víctimas mortales en Gaza se habría subestimado y que **los números reales serían más de un 40% superiores a los datos proporcionados hasta ahora por las autoridades de la Franja**, que apuntan a más de 46.000 personas fallecidas desde octubre de 2023 hasta principios de 2025. Según el estudio, **publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet**, que analizó el período entre octubre de 2023 y junio de 2024, las muertes en Gaza en ese período se elevarían a 64.260 –frente a las 37.877 reportadas por las autoridades de la Franja hasta ese momento. La investigación, que utiliza un método



Fuente: UNRWA

estadístico denominado análisis de captura-recaptura, estima que el 59,1% de las muertes corresponderían a mujeres, menores y personas mayores de 65 años. En un contexto de persistencia de las políticas israelíes de ataques indiscriminados y deliberados contra civiles en Gaza, ofensivas que provocaron nuevos desplazamientos masivos de población y el continuo bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria indispensable, diversos informes documentaron también las prácticas constitutivas de genocidio cometidas por Israel. A principios de diciembre, **Amnistía Internacional concluyó que Israel ha cometido y está cometiendo genocidio** contra la población palestina de Gaza. En un extenso informe, la organización de referencia en materia de derechos humanos expone la comisión de actos prohibidos por la Convención contra el Genocidio por parte de Israel, incluyendo asesinatos, daño físico y mental deliberado y la creación de condiciones de vida calculadas para conducir a la población palestina a su destrucción. Amnistía Internacional acusó a Israel de tratar a la población palestina como un grupo subhumano

carente de derechos y dignidad, demostrando su intención de eliminarles en un contexto favorecido por la impunidad. Días más tarde, **Human Rights Watch publicó un informe focalizado en la privación de agua** y concluyó que el patrón de políticas israelíes destinadas a bloquear el acceso a la población gazatí al mínimo de agua necesario para garantizar su supervivencia podían ser consideradas como acto de genocidio. Paralelamente, **otra investigación de Médicos Sin Fronteras** subrayó que las observaciones de sus equipos en terreno de la magnitud de la catástrofe humanitaria y de salud permitían concluir que se estaba desarrollando un genocidio en Gaza.

Cabe destacar que durante el último trimestre, concretamente el 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallan, por los indicios sobre su responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. La CPI también emitió una orden contra el líder militar de Hamas, Mohammed Deif, aunque se desconoce si el dirigente islamista está vivo o muerto. Cabe recordar también que el 17 de octubre fuerzas israelíes dieron muerte al líder de Hamas, Yahya Sinwar. **La muerte de Sinwar era percibida como un hito que Netanyahu necesitaba en el marco de su aspiración a una**

imprecisa “victoria total” sobre Hamas. Por ello, su deceso alentó los análisis y especulaciones sobre la oportunidad para un alto el fuego. Sin embargo, el Gobierno israelí mantuvo el foco en su ofensiva en la Franja y en sus hostilidades con Irán y Hezbollah. No fue hasta finales de año que se reactivaron los contactos indirectos entre Israel y Hamas facilitados por Qatar, Egipto y la administración de Joe Biden en EEUU, en un presunto último intento para llegar a un acuerdo antes del retorno a la Casa Blanca de Donald Trump el 20 de enero. Según trascendió a principios de enero, las partes habrían avanzado en un acuerdo y Hamas habría proporcionado a los mediadores la lista de los 34 israelíes cautivos que formarían parte de una primera fase de la implementación del acuerdo. El enviado especial para Oriente Medio designado por Trump, Steve Witkoff, se ha reunido con el Gobierno israelí y con los mediadores. Voces críticas en Israel han acusado a Netanyahu de retrasar deliberadamente un posible acuerdo a la espera de que Trump asuma el poder en EEUU. El Gobierno israelí espera que la llegada de Trump avale sus políticas, añada presión a Hamas y respalde sus ambiciones expansionistas e incluso una eventual anexión de Cisjordania. Tras la elección de Trump en noviembre, el ministro ultraderechista israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, manifestó su esperanza de que la anexión se produjera en 2025.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.